

VENEZUELA ESTADO O MAFIA

No existe una definición universalmente aceptada de lo que constituye un "estado mafioso" Pero aquí hay siete argumentos de por qué Venezuela califica y cuáles son las implicaciones de que esta problemática nación andina sea un centro regional del crimen.

1. Penetración criminal de alto nivel en las instituciones estatales

Hay aproximadamente 123 funcionarios que están involucrados en actividades criminales pertenecientes a las siguientes instituciones en los niveles más altos estado, quienes están involucradas en actividades criminales:

La Vicepresidencia, los Ministerios del Interior (Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno), Defensa (Ministerio del Poder Popular para la Defensa), Agricultura (Ministerio del Poder Popular de Agricultura Urbana), Educación (Ministerio del Poder Popular para la Educación), Servicio Penitenciario (Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario), Comercio Exterior e Inversión (Ministerio de Estado para el Comercio Exterior e Inversión Internacional), Electricidad (Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica)), la Guardia Nacional Bolivariana, las Fuerzas Armadas Bolivarianas, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y PdVSA.

La penetración de tantas instituciones clave, y el hecho de que constituyen los principales órganos del Estado en la lucha contra el crimen organizado, significa que Venezuela ni siquiera puede contener el crimen organizado, y mucho menos combatirlo eficazmente. Con tantos actores estatales con intereses en actividades criminales, ya sea el contrabando de combustible, la venta de alimentos y medicinas en el mercado negro o el tráfico de cocaína, este factor por sí solo sugiere que Venezuela califica como un estado mafioso .

2. Evidencia de cleptocracia

Las arcas del Estado han sido saqueadas a escala industrial por la élite bolivariana. Sin transparencia ni contabilidad pública de los presupuestos o gastos estatales, es difícil calcular cuánto se ha saqueado del país. Una investigación realizada por un comité del Congreso estimó la cifra en 70.000 millones de dólares. Un exministro ha declarado que la cifra se acerca a los 300 mil millones de dólares.

Sin datos concretos, todo lo que se puede hacer es reconocer la magnitud de la corrupción y observar algunos de sus principales motores. La falta de transparencia es una de ellas. Venezuela ocupa el puesto 166 de 176 países calificados por el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional . Si nadie sabe cuánto gana el Estado y cómo lo gasta, entonces no hay rendición de cuentas

y, por tanto, los funcionarios que controlan los presupuestos pueden fácilmente desviar fondos a sus propios bolsillos o a los de sus amigos. Esta cleptocracia ha sido ciertamente uno de los principales factores que ha llevado a Venezuela al borde del colapso económico y la bancarrota.

Armed Groups Operating in Venezuela

Targeted by the government

Financed by the government

Transnational organized crime

Common crime

Homicide

Extortion

Drug trafficking

Contraband

Kidnapping

Illegal mining

“Colectivos”

Armed civilian groups similar to paramilitaries. Alleged ideological ties to the government. Perform public safety, intelligence and repression functions in conjunction with government security forces. Control food sales in some areas.

“Pranes”

A “pran” is an incarcerated gang leader who directs criminal organizations on the outside called “trenes” from inside prison. The term has recently expanded to include people in control of criminal activity in the neighborhoods and gold mines in certain regions of the country.

Paramilitares o “paracos”

Paramilitary groups such as the Urabeños and Rastrojos that emerged along the border with Colombia from the United Self-Defense Forces of Colombia (Autodefensas Unidas de Colombia – AUC). Involved in contraband, drug trafficking, extortion and other crimes. This is also how the government defines criminal groups in general, distinguishing them from the colectivos.

ELN and FARC Dissidents

Colombian guerrilla groups operating in Venezuelan territory, primarily in border states. Involved in drug trafficking, extortion, kidnapping and contraband.

“Megabandas”

Criminal groups involved in kidnapping, extortion, drug dealing, car theft and other crimes. They possess high-caliber weapons and operate throughout the country.

Armed Forces

The Venezuelan Armed Forces consist of the army, National Guard, navy, air force and National Militia. While they are not criminal groups, many members are involved in criminal activity.

Los controles de divisas y precios introducidos por el gobierno venezolano en febrero de 2003 fueron uno de los principales facilitadores de la corrupción y la cleptocracia durante el gobierno de Hugo Chávez continuando hasta hoy.

“El sistema fue creado para ser abusado”, dijo Alejandro Rebolledo, abogado venezolano especializado en crimen organizado, en Caracas. Los tipos de cambio diferenciales se crearon bajo la premisa de evitar la fuga de capitales tras las

huelgas generalizadas que condujeron al golpe de 2002. Inmediatamente dieron lugar a “incentivos perversos”, según Carlos Miguel Álvarez, analista del centro de estudios venezolano Ecoanalítica. Empresas sin escrúpulos y funcionarios corruptos podían comprar dólares “baratos” al tipo de cambio oficial y venderlos por muchos más bolívares en el mercado negro.

Los importadores “inflan enormemente el valor de los bienes traídos al país para apoderarse de dólares estadounidenses a tipos de cambio bajísimos. A veces, falsifican los envíos por completo y no importan nada en absoluto”, según una investigación del New York Times.

Ahora, el sistema cambiario se utiliza para mantener leales a sectores clave. Los privilegiados obtienen acceso a dólares estadounidenses, lo que les permite obtener enormes ganancias. El principal beneficiario hoy es el ejército, que controla la importación y distribución de alimentos y medicinas, y se beneficia en términos criminales de este monopolio.

3. La devolución de poderes estatales a actores irregulares e ilegales

Tras el golpe militar de 2002 que derrocó a Hugo Chávez del poder durante 48 horas, el presidente realizó cambios clave en los mecanismos del poder para garantizar que no pudiera ser derrocado de la misma manera otra vez. Una de las medidas que adoptó fue delegar funciones estatales a elementos irregulares e incluso criminales. Las fuerzas de seguridad también perdieron el monopolio de la portación de armas. En cambio, ha habido una proliferación de armas y municiones en manos criminales, ya sea intencionadamente o mediante corrupción.

Los colectivos son grupos irregulares, generalmente armados, que tienen control sobre muchos barrios, principalmente en Caracas. Históricamente han disfrutado de la bendición del gobierno y, por lo tanto, de cierto grado de legitimidad, pero en última instancia no deben rendir cuentas a nadie. Ellos “vigilan” sus áreas de influencia y algunos incluso ofrecen un sistema de justicia paralelo. Si bien inicialmente fueron financiados por el gobierno de Venezuela, han recurrido cada vez más a actividades criminales para financiarse, principalmente el microtráfico de drogas, así como la extorsión. El gobierno del presidente Nicolás Maduro ha utilizado a los colectivos para ejercer control social en sus áreas de influencia y disolver las protestas de la oposición.



Los Colectivos también realizan vigilancia policial. Crédito: Carlos Ramírez

Los pranes son los jefes criminales dentro del sistema penitenciario de Venezuela. Bajo la ministra de Prisiones, Iris Varela, el gobierno ha entregado en gran medida el control del sistema penitenciario a los pranes, con el entendimiento de que mantienen la violencia al mínimo y previenen el desorden dentro del sistema penitenciario. El sistema de pranes se ha vuelto tan poderoso y exitoso que sus estructuras criminales ahora operan más allá de las puertas de la prisión, a menudo en conjunto con las llamadas “megabandas”, estructuras criminales que ahora ejercen control sobre gran parte del hampa venezolana.

4. Crecimiento exponencial del crimen organizado venezolano

Venezuela no tiene una larga tradición de crimen organizado. De hecho, hasta hace muy poco eran las mafias colombianas quienes controlaban gran parte del tráfico de drogas, la extorsión y los secuestros, y éstos se limitaban en gran medida a los estados fronterizos.

Hoy en día el crimen está rampante y Venezuela es probablemente la capital del secuestro en América Latina.

Desde el principio, el régimen bolivariano adoptó una extraña actitud ante el crimen. En un discurso que Chávez pronunció poco después de asumir la

presidencia, condonó a quienes robaban para alimentar a sus familias, en comentarios ampliamente interpretados como un estímulo para el crimen.

“La verdad es que sí, si yo fuera ese joven... y viera a mi hija a punto de morir de hambre creo que saldría a medianoche a hacer algo para que no se vaya a la tumba, no ¿Crees?” dijo en un discurso público.

“Los ricos son malos y los pobres son explotados, los pobres son delincuentes o violentos porque son pobres y explotados”, así describió Roberto Briceño-León, director del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV). la justificación ideológica del régimen para tolerar la criminalidad.

Ha habido una serie de políticas gubernamentales que han beneficiado directamente al crimen organizado. Uno comenzó en 2013, cuando el gobierno comenzó a implementar lo que se conoció como su política de “zona de paz”. Dirigido por José Vicente Rangel Ávalos, alcalde del municipio de Sucre en Caracas, la política consistía en realizar inversiones sociales en áreas de alta criminalidad y negociar con las comunidades locales para reducir el crimen. Lo que realmente terminó pasando fue que Rangel Ávalos se sentó con los líderes de las megabandas.

Parte de las negociaciones entre las megabandas y el gobierno fue un acuerdo verbal para no permitir el ingreso de las fuerzas de seguridad del Estado a las zonas designadas sin un acuerdo previo, según informes . Rangel Ávalos negó que ese fuera el caso, pero observadores y medios de comunicación informaron que el gobierno efectivamente entregó las áreas al control de las pandillas. Se convirtieron en ley de facto , y así ampliaron la confianza, la fuerza y el control territorial. La ausencia de las fuerzas de seguridad fue el factor más fundamental en el crecimiento de las pandillas. Al igual que sus colegas en las cárceles, las megabandas pudieron crear un Estado dentro del Estado.

Abandonaron a la gente cuando le dijeron a la policía municipal, a la policía estatal, a la policía de la ciudad que no podían patrullar estas [zonas de paz] para evitar malentendidos... y entonces los delincuentes dijeron: 'Oye hermano, esta es mi oportunidad'. convertir esta zona en nuestro territorio, traer víctimas de secuestro, cobrar rescates, golpear a la gente que vive aquí'.

La política de zonas de paz, nunca reconocida oficialmente por el gobierno, ha sido abandonada, pero las zonas en las que se practicaba siguen siendo algunas de las áreas con las tasas más altas de criminalidad.

Peace Zones in Venezuela



Se señalan que actualmente hay entre 12 y 16 megabandas, algunas con más de 300 miembros, operando en Venezuela, principalmente en los estados Miranda, Guárico, Carabobo, Aragua, Zulia, Bolívar, Táchira y en la capital Caracas.

Vinculado al crecimiento de las bandas criminales ha estado el aumento de las economías ilegales. El mayor ha sido durante mucho tiempo el contrabando de combustible subsidiado, el más barato del mundo, hacia Brasil y Colombia. Esto ahora está en gran medida en manos de la Guardia Nacional, que trabaja con grupos colombianos. Pero se creó una serie mucho más extendida de mercados negros a través del sistema de subsidios gubernamentales a alimentos y medicinas. Este mercado negro ha alimentado el crecimiento de actores criminales, que se benefician de su comercio o contrabando. Hoy en día, casi todos los venezolanos hacen negocios en los mercados negros, y muchos actores estatales, así como criminales, se benefician de ello, desdibujando una vez más las líneas entre el Estado y los criminales, socavando la legitimidad del gobierno.

5. Altos niveles de violencia por parte de actores estatales y no estatales

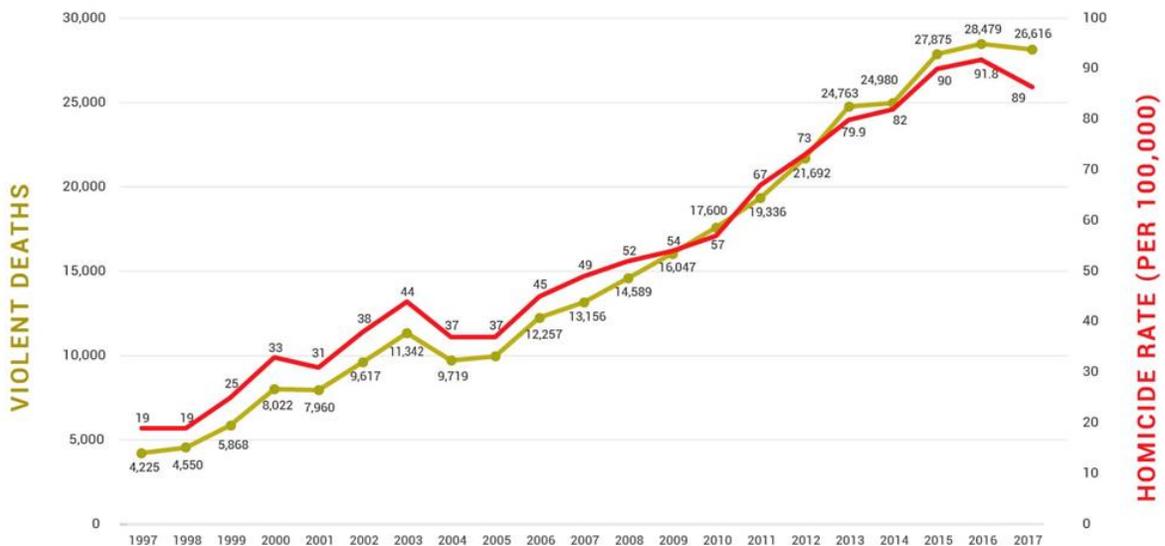
Si bien no existen estadísticas oficiales de homicidios, los datos más realistas sobre asesinatos los proporciona el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV). Colocó a Venezuela en 89 homicidios por cada 100.000 habitantes durante 2017, convirtiendo a la nación en la más peligrosa de América Latina, en una región con

las tasas de homicidios más altas del mundo. Caracas es una de las ciudades más mortíferas del planeta, con una tasa de homicidios de 130 por 100.000.

De los homicidios registrados por el OVV estos ocurrieron a manos de las fuerzas de seguridad, una proporción muy elevada, en medio de acusaciones generalizadas de ejecuciones extrajudiciales, a menudo en el contexto de los Operativos de Liberación del Pueblo. – OLP). Se trata de ofensivas contra el crimen, lanzadas por el presidente Nicolás Maduro, destinadas a reducir los índices de criminalidad rampantes. Se han caracterizado por un elevado número de asesinatos y acusaciones de que existe una mentalidad de “disparar primero, preguntar después”. Otro factor en el alto nivel de asesinatos estatales ha sido la respuesta dura a las protestas de la oposición. Las Naciones Unidas ya han cuestionado el alto nivel de asesinatos de las fuerzas de seguridad.

Estos niveles de homicidios pueden atribuirse firmemente al gobierno. Cuando Chávez asumió el poder en 1999, las tasas de homicidios rondaban los 25 por 100.000, con poco menos de 6.000 muertes violentas a finales de 1999, según el OVV. A partir de 1999, los homicidios comenzaron a aumentar y han aumentado constantemente año tras año.

Homicides in Venezuela



Method: The figures are derived by combining official homicide figures (mainly from the investigative police, CICPC) as well as information gathered by six regional observatories. They include official homicide figures, violent deaths under investigation, and those victims classified as “resisting authority.” The OVV believes that a death that is the result of the state’s use of force should be included as it reflects the level of violence that exists in Venezuela. The government of Venezuela does not publish regular homicide statistics and the figures above are an approximation.

6. La exportación de la criminalidad

Durante décadas, Colombia exportó conflicto y criminalidad a Venezuela, a medida que el conflicto civil de ese país traspasaba la frontera. Las organizaciones narcotraficantes colombianas y las facciones en guerra se establecieron,

convirtiendo a Venezuela en una base logística, un refugio seguro y una de las principales naciones de tránsito para la cocaína colombiana. Sin embargo, con los crecientes niveles de criminalidad y el contrabando a gran escala hacia los países vecinos, incluidas muchas islas pequeñas y vulnerables del Caribe, Venezuela se está convirtiendo en un exportador neto de criminalidad.

Gran parte de esto puede atribuirse a la pura desesperación. Los venezolanos hambrientos y sin un centavo, muchos de ellos con poca educación o habilidades comerciales, se han visto obligados a abandonar el país en su búsqueda de supervivencia. Son presa fácil del crimen organizado, como víctimas y reclutas.

La Cruz Roja estimó que al menos un millón de venezolanos huyeron de su país hacia Colombia durante los últimos 12 meses, y que aproximadamente 37.000 personas cruzaban la frontera todos los días.

Muchos de estos desposeídos están siendo reclutados por el crimen organizado.

7. Acusaciones internacionales generalizadas de conducta criminal

Otro indicador de un Estado mafioso es cuando suficientes actores internacionales cuestionan la legitimidad de un Estado, no sólo por sus credenciales democráticas, sino por sus actividades criminales.

No sorprende que Estados Unidos haya tomado la iniciativa de condenar al gobierno venezolano. En una de las declaraciones más recientes, Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, dijo que los venezolanos comunes y corrientes eran "las víctimas involuntarias de un narcoestado criminal".

El expresidente de Colombia Iván Duque , ha acusado al gobierno de Maduro de "utilizar bandas criminales para poder ejercer un mejor control sobre la sociedad, sobre el pueblo, una macabra asociación de bandas criminales con fuerzas de seguridad para controlar a la población"

Hay informes de "cientos de ejecuciones extrajudiciales en los últimos años, tanto durante protestas como durante operaciones de seguridad", afirmó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al-Husseini .

Panamá colocó a 54 figuras del gobierno venezolano, incluido el presidente Maduro, en una lista de personas en "alto riesgo" de participar en lavado de dinero o financiamiento del terrorismo.

La Unión Europea impuso sanciones a siete altos funcionarios del gobierno, entre ellos el ministro del Interior, Néstor Reverol, el presidente de la Corte Suprema, Maikel Moreno, el jefe de inteligencia, Gustavo González López, y el número dos

del gobernante partido socialista, Diosdado Cabello. Ahora están sujetos a congelación de activos y prohibiciones de viajar.

Incluso Suiza, no conocida por su política exterior agresiva, anunció sanciones contra Venezuela, afirmando que estaba "seriamente preocupada por las repetidas violaciones de las libertades individuales en Venezuela, donde el principio de separación de poderes está gravemente socavado y el proceso en vista de la próxima elección adolece de una grave falta de legitimidad".

Los venezolanos acudirán a las urnas para elegir a su próximo presidente. Nadie espera elecciones libres y justas, y el favorito para ganar es el presidente en ejercicio, Nicolás Maduro. Si gana, es probable que las tendencias mafiosas del Estado venezolano se solidifiquen aún más, y esta nación andina se convertirá en uno de los centros regionales del crimen de América Latina, con graves consecuencias para sus vecinos y la región en su conjunto.

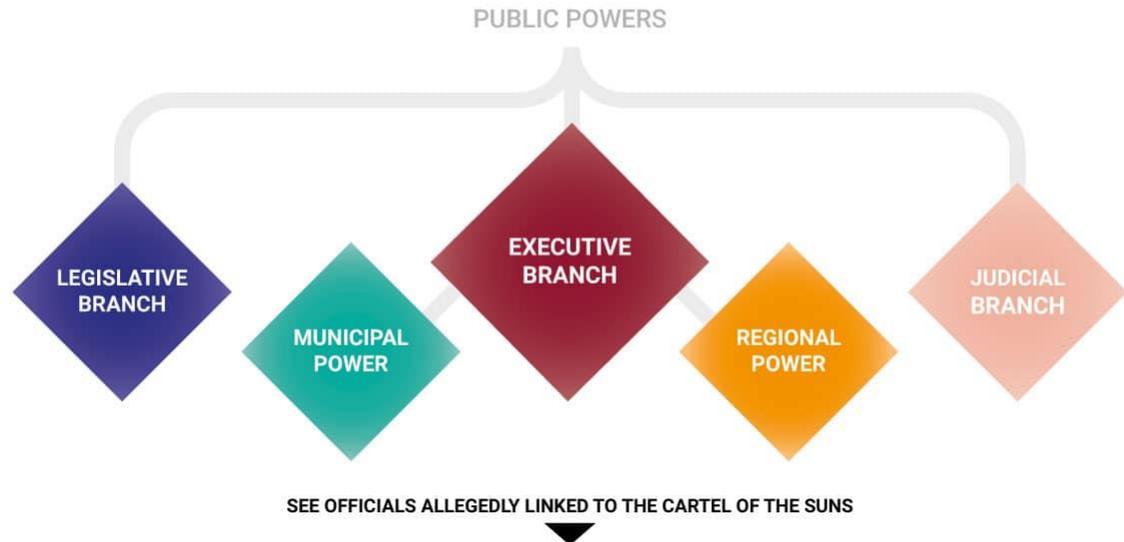
En América Latina, los empresarios criminales en forma de cárteles han dirigido tradicionalmente el tráfico de drogas. En Venezuela, se gestiona desde dentro del gobierno, y si Nicolás Maduro gana otro mandato, la posición de Venezuela en el negocio mundial de la cocaína se solidificará.

Los narcotraficantes llevan mucho tiempo intentando penetrar en el Estado, facilitar los negocios y, si es posible, poner recursos del Estado a su disposición. Pero a veces, los actores estatales corruptos deciden que hacer la vista gorda ante el tráfico de drogas a cambio de ganancias no es suficiente y que la participación directa está justificada. Esto es lo que ha sucedido en Venezuela y llamamos a los elementos del narcotráfico dentro del régimen venezolano el "Cártel de los Soles".

El término "Cártel de los Soles" proviene de las estrellas doradas que los generales de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) llevan en sus charreteras. El término se utilizó por primera vez en 1993, cuando dos generales de la Guardia Nacional, el jefe antidrogas Ramón Guillén Dávila y su sucesor Orlando Hernández Villegas, fueron investigados por tráfico de drogas. Hoy el nombre se utiliza para describir a todos los funcionarios gubernamentales involucrados en el tráfico de drogas. Y hay muchos, que se extienden a todos los órganos del Estado.

Cartel of the Suns, Drug Trafficking Inside the Regime

High-ranking members of the army and government have been accused or sanctioned for crimes related to drug trafficking since 2002.



 <p>Hugo Armando Carvajal Barrios</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ National Assembly Deputy for Monagas State since 2015 ◆ Military Counterintelligence Director 2004-2011; 2013- 2014 ◆ National Director of the Office Against Organized Crime 2012 	 <p>Henry de Jesús Rangel Silva</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Trujillo State Governor 2012 - present day ◆ Minister of Defense and Strategic Operations Commander of the Armed Forces 2012 ◆ Intelligence Service (DISIP) Director 2005-2008 	 <p>Ramón Emilio Rodríguez Chacín</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Guarico State Governor 2012-2017 ◆ PSUV Vice president for Llanos region 2012 ◆ Minister of the Interior, Justice and Peace 2008-2002
 <p>Cliver Antonio Alcalá Cordones</p> <p>Nicolás Maduro ordered his arrest in June 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Armoured 4th Division of Maracay Commander and Head of the Integral Defense Zone of Aragua 2010 ◆ Armoured 41st Brigade Commander and Head of the Valencia Garrison 2008 	 <p>Freddy Alirio Bernal Rosales</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Minister of Urban Agriculture, Head of the Local Storage and Production Committees (CLAP) and General Commissioner of the Bolivarian National Intelligence Service (SEBIN) since 2017 and Protector of Táchira State 2018 ◆ Mayor of Libertador de Caracas municipality 2000-2008 	 <p>Néstor Luis Reverol Torres</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Minister of the Interior, Justice and Peace 2012. reelected in 2016- present day ◆ General Commander of the Venezuelan National Guard 2014-2016 ◆ Head of the National Anti-Narcotics Office (ONA) 2008-2010

◆ Executive branch ◆ Municipal power ◆ Regional power ◆ Legislative branch ◆ Judicial branch



Diosdado Cabello

- ◆ National Assembly Deputy for Monagas State **2010 - present day**
- ◆ President of the National Assembly **2012-2016**
- ◆ Miranda State Governor **2004-2008**



Amílcar Jesus Figueroa Salazar

- ◆ Head of Operations of the Bolivarian Circles **2002-2008**



Tareck El Aissami

- ◆ Vice president of Venezuela since **2017**
- ◆ Aragua State Governor **2012-2017**
- ◆ Minister of the Interior, Justice and Peace **2008-2012**



Ramón Isidro Madriz Moreno

- ◆ Official of the Bolivarian National Intelligence Service (SEBIN) **2007-2014**



Edylberto Molina

- ◆ Vice Minister of the Integrated Police Service (VISIPOL) **2016 - present day**
- ◆ Military attaché of the Venezuelan Embassy in Berlin, Germany **2015**
- ◆ Sub-director of the National Anti-Narcotics Office (ONA) **2008-2010**



Rodolfo McTurk

- ◆ Interpol Director and Head of the Investigative Division of Interpol **2010-2012**
- ◆ Member of the investigative police force (CICPC) **2005-2010**
- ◆ Head of the Investigative Division of Interpol **2009**

◆ Executive branch ◆ Municipal power ◆ Regional power ◆ Legislative branch ◆ Judicial branch



Frank Morgado

- ◆ Ex-Head of the Anti-Narcotics Command **2002-2005**



Pedro Luis Martin Olivares

- ◆ Head of Financial Intelligence of the Bolivarian National Intelligence Service (SEBIN) **2007-2013**



Jesus Itriago

- ◆ Head of investigative police (CICPC) **2010-2013**



Jose David Cabello

- ◆ Superintendent of the National Integrated Service for the Administration of Customs Duties and Taxes (SENIAT) **2008 - present day**
- ◆ Trade Minister **2015-2016**
- ◆ Industry Minister **2014-2016**



Rafael Ramirez

- ◆ Permanent UN Representative for Venezuela **2015-2017**
- ◆ PDVSA President **2004-2014**
- ◆ Petrol and Mining Minister **2002-2014**



Bladimir Flores

- ◆ Inspector General of the investigative police (CICPC) since **2016**
- ◆ Head of the Technical Police Division of old PTJ **2002**

◆ Executive branch ◆ Municipal power ◆ Regional power ◆ Legislative branch ◆ Judicial branch



Efraín Antonio Campo Flores

Arrested and charged by a Federal Court in Manhattan in **2017**

Nephew of Venezuela's First Lady



Francisco Flores de Freitas

Arrested and charged by a Federal Court in Manhattan in **2017**

Nephew of Venezuela's First Lady



Walter Jacob Gavidia Flores

President of the Pro-Patria Foundation **2000 2014-2015**



Cilia Flores

First Lady of Venezuela



Carlos Erick Malpica Flores

- ◆ National Treasurer **2013-2016**
- ◆ Vice president and Internal Finance Director of PDVSA **2014-2016**
- ◆ Acting Director of Vice presidency **2012**



Vassily Kotosky Villaroel Ramirez

Captured in Venezuela in **2015**

- ◆ Captain of the National Bolivarian Guard (GNB) **2007-2013**

◆ Executive branch ◆ Municipal power ◆ Regional power ◆ Legislative branch ◆ Judicial branch



Yazenky Antonio Lamas Rondón

Captured in Bogotá (Colombia) in June 2016 and extradited to the United States in **2017**

- ◆ Ex-army official and pilot



Rafael Antonio Villasana F.

Captured in Venezuela in **2016**

- ◆ Captain of the National Bolivarian Guard (GNB) **2007 - 2013**



Carlos Luis Justiniano Nuñez

◆ Captured in the Dominican Republic and released in 2016, location unknown since then

- ◆ Commercial Pilot **2007-2016**



Darry Francisco Fortoul Ochoa

- ◆ Lieutenant Colonel of the National Bolivarian Guard (GNB)
- ◆ Member of Top Management of the Venezuelan Foundation for the Prevention and Treatment of Drug Consumption **2008-2009**



Eliécer García Torrealba

Detained in Venezuela in **2016**

- ◆ Head of Interpol in Lara State **2016**



Benny Palmeri-Bacchi

Detained in 2014 and sentenced in **2015**

- ◆ Judge and State Attorney

◆ Executive branch ◆ Municipal power ◆ Regional power ◆ Legislative branch ◆ Judicial branch

En lugar de marginar a los acusados de narcotráfico, Maduro los ha ascendido a los cargos más altos, quizás calculando que son los que tienen más que perder si su régimen cae y, por lo tanto, serán los que lucharán más duro para preservarlo.

Las figuras más poderosas del régimen bolivariano ahora están manchadas de narcotráfico en distintos grados.

Diosdado Cabello es promocionado como la segunda figura más poderosa del régimen de Venezuela o como el titiritero, el poder detrás de Maduro. De cualquier manera, con su influencia en el nombramiento de funcionarios para puestos clave, especialmente dentro del ejército, no hay forma de que no esté al tanto de la dinámica del narcotráfico en el país

En mayo de 2015, el Wall Street Journal reveló que Cabello estaba siendo investigado por narcotráfico y ser líder del Cártel de los Soles. Las pruebas han sido proporcionadas, entre otros, por Leasmy Salazar, quien solía trabajar como jefe de seguridad de Cabello. Ha declarado que Cabello desempeña un papel destacado en el paso de la droga por Venezuela.



Salazar con Cabello y Chávez

Cabello inmediatamente demandó al Wall Street Journal por difamación, pero en abril de este año un tribunal estadounidense rechazó el caso. También se nombra en el artículo a su hermano David Cabello.

Sobre el papel, el segundo hombre más importante del gobierno es el vicepresidente Tareck El Aissami. También ha sido acusado de actividades ilegales, incluido el tráfico de drogas. Antes de convertirse en vicepresidente, fue gobernador del estado Aragua, y hay informaciones sobre sus vínculos con el crimen organizado en esta estratégica provincia de la costa caribeña.

Uno de los puestos más importantes en términos de seguridad interna es el de jefe de la Guardia Nacional. Ese cargo lo ocupaba el mayor general Néstor Reverol, ahora ministro del Interior, quien ha sido acusado en Estados Unidos de tráfico de drogas. Su acusación afirma que Reverol advirtió a los narcotraficantes sobre operaciones en su contra, bloqueó investigaciones, liberó a los narcos arrestados y garantizó que las drogas incautadas fueran devueltas a los narcotraficantes.

Cilia Flores, esposa del presidente Maduro y por tanto primera dama, también ha sido implicada en el narcotráfico por asociación. No sólo sus sobrinos han sido condenados en Estados Unidos por tráfico de cocaína, sino que también está bajo investigación su hijo, Walter Jacobo Gavidia, juez del Área Metropolitana de Caracas . También ha sido vinculada con el caso del capitán Yazenky Antonio Lamas Rondón, un piloto venezolano extraditado de Colombia a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico. Ha sido acusado de más de cien narcovuelos en la última década desde el estado venezolano de Apure hacia el Caribe.

El desarrollo del cartel de los soles

Las estructuras de narcotráfico en el Estado venezolano no son un cartel, son una serie de redes, a menudo en competencia, enterradas en lo más profundo del régimen chavista, con vínculos que se remontan a casi dos décadas.

Venezuela siempre iba a jugar un papel en el narcotráfico, posicionada como está junto al principal productor mundial de cocaína, Colombia. Sin embargo, inicialmente fueron los narcotraficantes colombianos quienes dirigieron el negocio dentro de Venezuela, pagando a oficiales militares a lo largo de la frontera para que hicieran la vista gorda mientras la cocaína cruzaba la frontera. Luego, inevitablemente, la corrupción se hizo más profunda. En lugar de simplemente mirar para otro lado, los narcotraficantes colombianos pidieron a elementos de la GNB proteger e incluso mover los cargamentos. Su papel de protección de fronteras, aeropuertos y puertos los convirtió en los socios perfectos para los traficantes.

En la década de 1990, también se estaba exportando el conflicto civil colombiano, con los ejércitos rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) estableciendo su residencia en Venezuela. estados fronterizos. Ambos grupos han estado involucrados durante mucho tiempo en el tráfico de drogas y desarrollaron estrechos vínculos con funcionarios venezolanos, a menudo con la bendición del presidente Hugo Chávez. Los archivos incautados del campamento del comandante de las FARC Luis Edgar Devia Silva, alias “Raúl Reyes”, muerto en un bombardeo aéreo en Ecuador en marzo de 2008, revelaron los nombres de varios altos funcionarios venezolanos. Algunos de ellos han estado vinculados a la actividad del narcotráfico, entre ellos:

-Ramón Rodríguez Chacín, quien fue ministro de Justicia e Interior en 2008, se reunió muchas veces con miembros de las FARC y era conocido por ellos con el alias de “El Cojo”.

-Hugo Armando Carvajal Barrios, director de inteligencia militar, y Henry Rangel Silva, director de la policía de inteligencia (DISIP), actuaron como enlace con el ejército rebelde. Ambos fueron posteriormente sancionados por “ayudar materialmente a las actividades de narcotráfico de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), una organización narcoterrorista”.

Freddy Bernal, exalcalde; Clíver Acalá Cordones, General del Ejército; y Ramón Madriz Moreno, un oficial clave de inteligencia, se reunieron con líderes de las FARC y ayudaron a coordinar su seguridad cuando estuvieron en suelo venezolano. Bernal y su mano derecha, Amílcar de Jesús Figueroa, supuestamente ayudaron a organizar guerra urbana y entrenamiento con explosivos para los Círculos/Colectivos Bolivarianos con las FARC.

Los vínculos entre el Cartel de los Soles y las FARC fueron decisivos en el desarrollo del narcotráfico en Venezuela. Si bien las FARC se desmovilizaron en 2017 después de firmar un acuerdo de paz con el gobierno colombiano, todavía hay crecientes elementos disidentes en Venezuela, profundamente involucrados en el tráfico de drogas. Estos elementos todavía están trabajando con miembros del Cartel de los Soles.

Un momento clave en el fortalecimiento del narcotráfico en Venezuela llegó con la expulsión en 2005 de la Administración para el Control de Drogas (DEA), después de que Chávez declarara que estaba "usando la lucha contra el narcotráfico como una máscara para apoyar el narcotráfico y espiar en Venezuela". Contra el gobierno." Esto, combinado con la suspensión del acuerdo de sobrevuelo para el seguimiento de los vuelos de drogas, significó que Venezuela se convirtió repentinamente en un agujero negro para la recopilación de inteligencia de Estados Unidos en la lucha antinarcóticos. El crimen organizado se aprovechó rápidamente de esto, y las organizaciones narcotraficantes aumentaron su uso de territorio venezolano.

También en 2005, la aprobación de una nueva ley sobre drogas (Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias) decretó que las investigaciones y operaciones antinarcóticos ya no serían competencia exclusiva de la Guardia Nacional sino que incluirían a todas las demás ramas de las fuerzas armadas. fuerzas: el ejército, la marina y la fuerza aérea. El Cartel de los Soles se expandió repentinamente desde la Guardia Nacional a todas las ramas del ejército. Mildred Camero, la zar antidrogas de Chávez en ese momento, dijo que este fue el momento en que los militares pasaron de ser un facilitador en el tráfico de drogas a un participante activo. Antes de la aprobación de la ley, el tráfico de drogas se limitaba en gran medida a la Guardia Nacional, pero una vez que se dio jurisdicción a todas las ramas del ejército "se desató una guerra", según Camero.

Esto, junto con la presión internacional, llevó a la captura de varios narcotraficantes colombianos de alto nivel en Venezuela durante 2011 y 2012. Estos arrestos marcaron una participación aún más profunda en el tráfico de drogas por parte del Cartel de los Soles. Entre los detenidos se encuentran Maximiliano Bonilla Orozco, alias "Valenciano", líder de la organización criminal "Oficina de Envigado", capturado en noviembre de 2011; Héctor Germán Buitrago, alias "Martín Llanos", un caudillo paramilitar que durante mucho tiempo había traficado drogas a través de los llanos orientales de Colombia hacia Venezuela, arrestado en febrero de 2012; Diego Pérez Henao, alias "Diego Rastrojo", jefe militar del grupo criminal Los Rastrojos, capturado en junio de 2012; y luego Daniel Barrera Barrera, alias "El Loco", uno de

los traficantes de cocaína colombianos más prolíficos, arrestado en septiembre de 2012. Estos traficantes habían sido protegidos por funcionarios venezolanos de alto nivel. Después de sus capturas, el Cartel de los Soles se hizo cargo de muchas de las rutas que los colombianos habían estado recorriendo, pasando así de proteger los envíos a comprarlos y venderlos, tratando directamente con compradores internacionales, sobre todo los carteles mexicanos.

Casos Emblemáticos del Cártel

La primera persona que habló con conocimiento interno sobre la penetración del narcotráfico en el Estado venezolano fue Walid Makled.

Makled era, a finales de los años 1990, uno de los narcotraficantes más poderosos de Venezuela. Su poder se basaba en sus fuertes vínculos con altos miembros del ejército venezolano, y su imperio criminal creció exponencialmente durante los primeros años del gobierno de Chávez. Controlaba el negocio del narcotráfico en el estado de Carabobo, donde se encuentra el principal puerto de Venezuela, Puerto Cabello. Según la DEA, más del 70 por ciento de los narcóticos enviados desde Colombia a través de Venezuela fueron enviados desde Puerto Cabello. Makled estaba relacionado con el ex general de la Guardia Nacional y entonces gobernador de Carabobo, Luis Felipe Acosta Carles. El general Alexis Maniero, jefe del Comando Regional del VII Ejército en el estado Sucre, agilizó las credenciales oficiales para Makled, quien lo consideraba un valioso aliado.

En 2004, Makled perdió momentáneamente cuatro toneladas de cocaína a manos de la policía local de Valencia. Las drogas le fueron devueltas por Jesús Itriago, entonces jefe del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), después de que Makled le pagara un millón de dólares, según documentos de la DEA vistos por El Nuevo Herald. Posteriormente, una investigación oficial fue abortada en la legislatura del estado de Carabobo, cuando, según informes, Makled también pagó a políticos clave para que abandonaran la investigación. Posteriormente, Itriago fue ascendido a jefe de la división de drogas del CICPC.

En abril de 2006, Makled fue vinculado con 5,5 toneladas de cocaína encontradas en 128 maletas en un avión que aterrizó en el sur de México, habiendo salido del aeropuerto de Maiquetía (ahora Aeropuerto Internacional Simón Bolívar) en las afueras de Caracas. El piloto capturado del vuelo habló de la Guardia Nacional supervisando la carga y salida del avión.

Los vínculos entre Makled, las FARC y el gobierno de Chávez se hicieron más claros después de que Makled fuera capturado en la ciudad fronteriza colombiana de Cúcuta en agosto de 2010. Makled era en ese momento probablemente el narcotraficante nativo más poderoso de Venezuela: fue agregado a los EE.UU. "Kingpin List" en 2009. Su posición como intermediario entre las FARC y elementos corruptos de las fuerzas armadas venezolanas, entre otros, significaba que probablemente sabía más que nadie sobre los mecanismos de la corrupción y el

narcotráfico en Venezuela. En entrevistas con los medios de comunicación después de su arresto, Makled afirmó que "todos mis socios comerciales son generales" y que había pagado a hasta 40 generales venezolanos como parte de sus actividades de narcotráfico.

Los militares en servicio o exmiembros nombrados por Makled incluían al general militar Henry Rangel Silva (quien posteriormente fue nombrado ministro de Defensa), el ex director de Inteligencia Militar Hugo Carvajal, el general de la Guardia Nacional Dalal Burgos y el excapitán Ramón Rodríguez Chacín, quien en ese momento era el Ministro del Interior y de Justicia. Makled afirmó que solía pagarle a Carvajal 50.000 dólares semanales por su ayuda y cooperación. Silva, Carvajal y Rodríguez ya habían sido sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su vinculación con las FARC y el narcotráfico.

Makled dijo que hasta seis narcovuelos diarios salían del estado fronterizo de Apure, llevando cocaína a Honduras, desde donde era enviada a México y Estados Unidos. Insistió en que había laboratorios de droga en Apure y Maracaibo, y que estaban "custodiados por el gobierno". Si bien Makled admitió que no había tratado directamente con Chávez, dijo que había hablado con "parientes suyos muy cercanos" se cree que era su hermano Adán, y también afirmó haber financiado una de las campañas presidenciales de Chávez a cambio de concesiones en Puerto Cabello.

Hoy, Makled se encuentra en una cárcel militar venezolana, al igual que muchos de los secretos sucios del régimen. En septiembre de 2013, Francia realizó una de las mayores incautaciones de cocaína de su historia: encontró 1,3 toneladas de cocaína a bordo de un avión de Air France que aterrizó en París, empaquetadas en 31 maletas. El vuelo había salido del aeropuerto de Caracas, estrechamente controlado por la Guardia Nacional. El escándalo internacional obligó al gobierno venezolano a actuar. Se realizaron veintiocho detenciones, entre ellas un teniente coronel y otros miembros de la Guardia Nacional. Con estas detenciones se paralizaron las investigaciones del gobierno venezolano y no se intentó seguir líneas de investigación que condujeran a figuras de mayor rango.

En noviembre de 2016, Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, sobrinos de la esposa y primera dama de Maduro, Cilia Flores, fueron condenados por un tribunal de Nueva York por conspirar para traficar 800 kilogramos de cocaína al país.

Los primos planeaban sacar la cocaína, proporcionada por las FARC, fuera del aeropuerto internacional de Caracas utilizando sus privilegios como miembros de la élite venezolana y su relación con los militares. Volaron a Haití en noviembre de 2015, donde planeaban sellar el negocio de la droga, pero fueron arrestados por la DEA. El avión era pilotado por Pablo Urbano Pérez, oficial militar, y Pedro Miguel Rodríguez, teniente coronel de la Fuerza Aérea Venezolana.

La evidencia de que uno de los sobrinos, Efraín Antonio Campo Flores, planeaba destinar parte de las ganancias del negocio de las drogas a la campaña política de su tía como presidenta de la Asamblea Nacional, sugiere que la primera dama no ignoraba las actividades de sus sobrinos y de donde obtenían su dinero.

La preocupación actual es la implícita relación Venezuela- Irán en donde se rumora que los vuelos y barcos salen con cocaína para medio oriente ahora sin control alguno fortaleciendo aún mas este comercio ilegal y al parecer sustentando actividades terroristas con el dinero del narcotráfico sumado a la gran preocupación existente a nivel internacional de los procesos de energía atómica de irán en la región que al parecer se financian con este mismo dinero.

El cartel hoy

El Cartel de los Soles hoy es una red dispar de traficantes, que incluye actores estatales y no estatales, pero todos operan con la bendición y protección de altas figuras del gobierno venezolano. Sin esa cobertura política superior y sin pagar a las personas adecuadas, las operaciones de contrabando de drogas se cierran.

Mientras el país se tambalea al borde de la bancarrota, la cleptocracia y el saqueo sistemático de las arcas estatales han disminuido. Simplemente no hay más dinero que robar del presupuesto gubernamental. Sin embargo, es necesario engrasar las ruedas de la corrupción, especialmente dentro del ejército, que es el puntal clave que sostiene al gobierno de Maduro y que será el factor decisivo durante cualquier cambio de régimen.

El narcotráfico es uno de los principales lubricantes de la corrupción en Venezuela hoy en día, y que esta problemática nación andina se está convirtiendo en uno de los principales centros de tráfico de cocaína del mundo.

Sus partidarios los conocen como “caballeros de acero” en sus motocicletas y como los más fervientes defensores de la Revolución Bolivariana de Venezuela. Sin embargo, ahora parecen más bien bandas criminales con un inmenso control social. Bienvenidos al mundo de los “colectivos”.

En 2002, el presidente Hugo Chávez enfrentó dos intentos de derrocarlo del poder: un golpe militar y una huelga en el crucial sector petrolero. A raíz de estas amenazas, decidió que necesitaba estructuras de seguridad paralelas que pudieran actuar como contrapeso al ejército y la capacidad de concentrar rápidamente tropas de choque político contra los manifestantes de la oposición. Su solución fueron los colectivos.

El término “colectivos” tiene sus raíces en los grupos guerrilleros venezolanos de los años sesenta. Pero la Revolución Bolivariana de Chávez se apropió de él. En 2001, Chávez creó una nueva generación de grupos políticos, los "Círculos Bolivarianos", para conseguir apoyo político de base.

Estos Círculos Bolivarianos demostraron su lealtad y voluntad de utilizar la violencia durante el intento de golpe de abril de 2002. Imágenes de vídeo del 11 de abril muestran a manifestantes antigubernamentales atacados por hombres armados, posteriormente identificados como miembros de los Círculos Bolivarianos, que abrieron fuego desde el Puente Llaguno en el centro de Caracas. Al final de ese día, 20 personas yacían muertas y decenas más, tanto chavistas como manifestantes, resultaron heridos.

Los generales militares rechazaron las órdenes de Chávez de movilizarse contra las protestas antigubernamentales. Chávez finalmente accedió a renunciar con la condición de que él y su familia se exiliaran en Cuba.³ Sin embargo, en 48 horas, Chávez estaba de regreso en el poder, principalmente gracias al General Raúl Baduel, entonces comandante de la 42ª Brigada de Infantería Paracaidista, quien reunió a miembros clave sectores del ejército. Este fue el momento en que Chávez radicalizó su revolución y decidió aferrarse al poder a toda costa.

Sólo tres personas fueron encarceladas tras los violentos hechos del 11 de abril. Uno de ellos fue Iván Simonovis, entonces jefe de la Policía Metropolitana de Caracas. Fue sentenciado a 30 años de cárcel.

El término colectivo comenzó a reemplazar al de Círculos Bolivarianos en el lenguaje público del gobierno después del golpe. En 2006, estos grupos progubernamentales de aplicación de la ley quedaron bajo el paraguas de los “consejos comunales” del gobierno, a través de los cuales recibieron financiación y recursos estatales, incluidas armas. Se les concedió legitimidad y poder real en sus áreas de influencia.



Grupo de Colectivos

Los trabajos diarios que tienen muchas de estas personas [en los colectivos] son en realidad de seguridad para los funcionarios del gobierno. Eso les da acceso directo a los recursos del gobierno, pero también a las armas del gobierno

Dentro del Barrio 23 de Enero

No hay lugar en Venezuela más emblemático de la Revolución Bolivariana y los colectivos que el barrio 23 de Enero de Caracas. Aquí es donde tienen su sede muchos de los colectivos más infames y poderosos.

El Cuartel de La Montaña, el lugar de descanso final de Hugo Chávez, un fuerte que extrañamente recuerda a un castillo europeo, mira hacia el extenso barrio 23 de Enero, una combinación de viviendas improvisadas y chozas agrupadas alrededor de altos bloques de apartamentos. Abajo se puede ver el palacio presidencial, la Casa de Miraflores.

Sin embargo, en los últimos años, sus residentes han comenzado a cuestionar no sólo el régimen chavista, sino también su rostro local, los colectivos. Si bien unos pocos todavía están desarmados y concentrados en sus raíces culturales y comunitarias originales, la mayoría se han convertido en ejecutores armados que juran lealtad a la revolución, financiada en parte a través de actividades criminales.

Cada centímetro del 23 de Enero está controlado y monitoreado por los colectivos. Los controles colectivos controlan y a menudo gravan la circulación de vehículos. Los colectivos tienen varias fuentes de ingresos, algunas legales, otras definitivamente ilegales. De las corrientes legales, la mayoría proviene del gobierno, aunque algunos colectivos han establecido negocios que obtienen ganancias legales. Los ingresos del gobierno provienen cada vez menos de pagos en efectivo, sino más bien de concesiones, como la distribución de alimentos, que ahora es un negocio muy lucrativo.

Uno de los líderes del histórico colectivo Tupamaros, Lisandro Pérez, más conocido por su alias "Mao", comparó el tráfico de alimentos con el narcotráfico en términos de ganancias. Muchos de los que vendían drogas ahora trafican con alimentos. Es menos riesgoso y más rentable.

Lo mismo ocurre con las ventas de medicamentos, que ahora siempre escasean y pueden exigir precios exorbitantes a los desesperados. Cada colectivo tiene un jefe y un comandante, y todos quieren ser colectivos porque quieren armas. Todos quieren tener más armas que los demás. Cada líder está a cargo de su territorio y hace allí lo que quiere. Aquí dicen que son demócratas.

La Piedrita

La mitología mesiánica de uno de los colectivos más notorios del 23 de Enero queda perfectamente ilustrada en esta imagen. Jesús, con su corona de espinas

empuñando un Kalashnikov, junto a la Virgen, acunando al niño Jesús y otro AK-47.



Esta es la cara pública de La Piedrita.

El colectivo La Piedrita nació antes del chavismo. Sus fundadores Valentín Santana y Carlos Ramírez crearon el grupo en septiembre de 1985 en un esfuerzo por revertir la violencia que domina partes del barrio 23 de Enero. Varios hermanos y familiares de Santana pertenecen al colectivo, que se define por fuertes principios marxistas-leninistas.

La Piedrita dirige una estación de radio local y brindó instalaciones a los médicos cubanos, desaparecidos hace mucho tiempo, que alguna vez vinieron a servir a la comunidad. El colectivo también posee una pequeña granja urbana que cría pollos y cultiva verduras, que se venden a precios locales. Se están preparando planes para una panadería. Pero el colectivo es más conocido por sus actos violentos y su reputación, y ha llegado a representar la agresión asociada con los grupos progubernamentales.

Miembros de La Piedrita han atacado a manifestantes de la oposición y a los medios de comunicación con gases lacrimógenos, acusándolos de bloquear el proceso revolucionario. Santana, que tiene experiencia militar que ha aprovechado para inculcar un sentido de disciplina y una fuerte estructura vertical dentro del grupo, ha afirmado que La Piedrita está dispuesta a defender la Revolución Bolivariana “a toda costa”.

A la fecha Santana tiene tres órdenes de aprehensión a su nombre, dos de ellas por homicidio. Pese a ello, aparece frecuentemente en público y ha sido entrevistado por medios internacionales. En febrero de este año, Satana publicó un video en su cuenta de Twitter, mostrándose abrazando a altos funcionarios del gobierno, incluido el general Fabio Zavarse Pabón, comandante de toda la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y tropas del ejército en el Distrito Capital, quien fue Recientemente sancionado por Estados Unidos por la represión de manifestaciones.

Remplazo de poderes estatales

El poder de los colectivos no se limita a realizar actividades fraudulentas en sus áreas de influencia. Desde que Chávez dismanteló la Policía Metropolitana en 2011, el régimen abdicó en favor de los colectivos la seguridad en la 23 de Enero, así como en algunas otras partes de la capital. Las fuerzas de seguridad del Estado están obligadas a coordinarse con ellos para ingresar a estas zonas.



Integrantes del Colectivo Alexis Vive

Algunos de los colectivos trabajan junto a las fuerzas de seguridad, a menudo haciendo el trabajo sucio por ellas. Colectivos como "Tres Raíces" y "Frente 5 de Marzo" son bien conocidos por sus estrechos vínculos con elementos de las fuerzas de seguridad.

Tres Raíces es uno de los colectivos mejor armados , y varios de sus miembros sirven en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Policía Municipal de Libertador (Policía del Municipio Libertador - PoliCaracas), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dirección General de Contrainteligencia Militar - DGCIM) o la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (Fuerza de Acciones Especiales - FAES).

Aunque los miembros de Tres Raíces han sido vinculados con secuestros y asesinatos, los contactos de alto nivel en las fuerzas de seguridad han significado que no hayan sido procesados por estos crímenes.

El colectivo Frente 5 de marzo fue fundado por un ex policía, José Miguel Odremán, quien fue asesinado en un operativo de las fuerzas de seguridad en 2014. Su colectivo estaba bajo investigación por siete asesinatos, además de robo y extorsión. También creó un servicio de escoltas, la Asociación Bolivariana de Escoltas de Venezuela, que actuaba esencialmente como sicarios.

También ha habido acusaciones de que los colectivos han estado involucrados en las controvertidas Operaciones para Liberación del Pueblo (OLP). Se trata de ofensivas contra el crimen lanzadas por el presidente Nicolás Maduro para tratar de reducir los índices de criminalidad rampantes. Se han caracterizado por un elevado número de asesinatos y acusaciones de que existe una mentalidad de “disparar primero, preguntar después”.

Las OLP han fracasado en su objetivo principal de reducir el crimen, pero han alimentado tasas récord de asesinatos, en medio de acusaciones de que las fuerzas gubernamentales han participado en ejecuciones extrajudiciales. Los sobrevivientes y las familias de sus víctimas dicen que los participantes en las OLP disparan a matar .

Los colectivos aún desempeñan su papel tradicional como tropas de choque político y fueron desplegados contra la ola de protestas que tuvo lugar en 2017, utilizando botes de gas lacrimógeno e incluso disparando pistolas para disolver las protestas de la oposición.

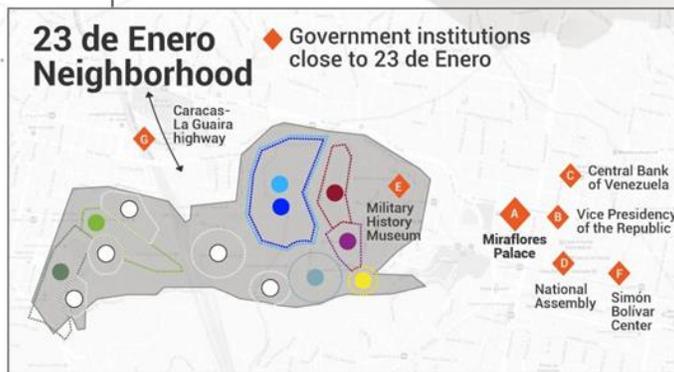
Se les paga para generar violencia... pagados por intereses específicos que buscan crear caos la presencia de 46 colectivos en el barrio 23 de Enero, que van desde modelos “tradicionales” hasta modelos emergentes Algunos de estos grupos son pequeños y no tienen una identidad conocida.

Colectivos in Caracas



Colectivos

- Frente 5 de Marzo
- Ex-Frente 5 de Marzo
- La Piedrita
- Pérez Bonalde
- Tupamaros
- Alexis Vive
- Montaraz - Salvador Allende
- José Leonardo Chirinos
- Tres Raíces
- Coordinadora Simón Bolívar
- Divino Niño
- Lídice
- Sombra
- Not identified



Colectivo Expansion

Colectivos are groups that originated in Caracas and operate primarily in urban areas. However, armed colectivos now have presence in at least 16 of Venezuela's 23 states: *Miranda, Aragua, Carabobo, Lara, Portuguesa, Yaracuy, Falcón, Mérida, Trujillo, Táchira, Zulia, Sucre, Guárico, Bolívar, Monagas and Anzoátegui.*

Está claro que el control gubernamental sobre los colectivos se ha debilitado, si no evaporado, en muchos casos. Esto se debe en parte al actual caos político y crisis económica, que los colectivos no ven como una debilidad de la Revolución Bolivariana. Más bien, atribuyen la situación a la traición de Maduro a los principios

revolucionarios. La otra razón es que el gobierno está en quiebra y ha recortado la financiación en todos los frentes, incluida la financiación destinada a los colectivos. Esto ha obligado a los colectivos a volverse más autosuficientes financieramente, lo que en muchos casos ha significado involucrarse en actividades criminales.

También existe una conexión entre algunos de los colectivos y grupos rebeldes colombianos, una relación inicialmente fomentada por Chávez pero ahora fuera del alcance de Maduro. Algunos colectivos han recibido entrenamiento de la mano de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del ELN.



La evidencia de fuentes disidentes de las FARC sugiere que se están desarrollando relaciones con grupos venezolanos como los colectivos, más en interés de negocios ilegales que de afinidad ideológica.

Si la oposición gana las próximas elecciones presidenciales y la Asamblea Nacional es reinstalada como el principal órgano legislativo de Venezuela, es probable que los colectivos se encuentren bajo una enorme presión para desarmarse y disolverse.

Por tanto, la supervivencia de los colectivos depende de la supervivencia del régimen. Si el partido gobernante cae, lo que queda del apoyo y la tolerancia de los colectivos también se desmoronará, dándoles una de dos opciones: disolverse o transformarse en entidades puramente criminales.

Colombia y Venezuela han compartido dinámicas criminales durante décadas. Colombia ha empujado la cocaína a través de Venezuela en su viaje hacia los mercados de Estados Unidos y Europa, mientras que el combustible de contrabando de Venezuela ha salido a borbotones en la otra dirección. Pero hoy los vínculos criminales son mucho más complejos y cada vez más simbióticos.

Durante décadas, el conflicto civil de Colombia se extendió a Venezuela, en la forma de desplazados desesperados que huían de la violencia y de facciones en guerra de Colombia que buscaban refugio. La ola humana ahora fluye en la otra dirección, principalmente los venezolanos desplazados económicamente, hambrientos y enfermos que buscan una vida mejor y están dispuestos a trabajar por una comida caliente. El conflicto civil de Colombia está llegando a su fin y sólo queda una facción en conflicto en el campo de batalla: el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Venezuela proporciona el santuario definitivo para el ELN y es la base clave desde la cual este ejército rebelde planea su expansión. El santuario en Venezuela explica en gran medida la falta de voluntad del ELN para llegar a acuerdos en la mesa de paz. La frontera entre Colombia y Venezuela es ahora una de las principales regiones de criminalidad en América Latina, generando cientos de millones de dólares en ingresos ilícitos. Es el hogar de una plétora de economías criminales y alimenta a docenas de grupos criminales.

Economías criminales en la frontera

La región fronteriza colombiana del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, es el lugar más barato del mundo para producir cocaína. También es ahora una de las zonas de producción y cultivo de drogas más prolíficas de Colombia. Las laderas de las montañas andinas aquí tienen algunos de los mayores rendimientos de cocaína por hectárea, más de siete kilogramos por año, según fuentes de la policía antinarcoóticos de Colombia. El principal precursor químico en el procesamiento de la cocaína es la gasolina, y gracias a los subsidios al combustible de Venezuela, es muy barata.

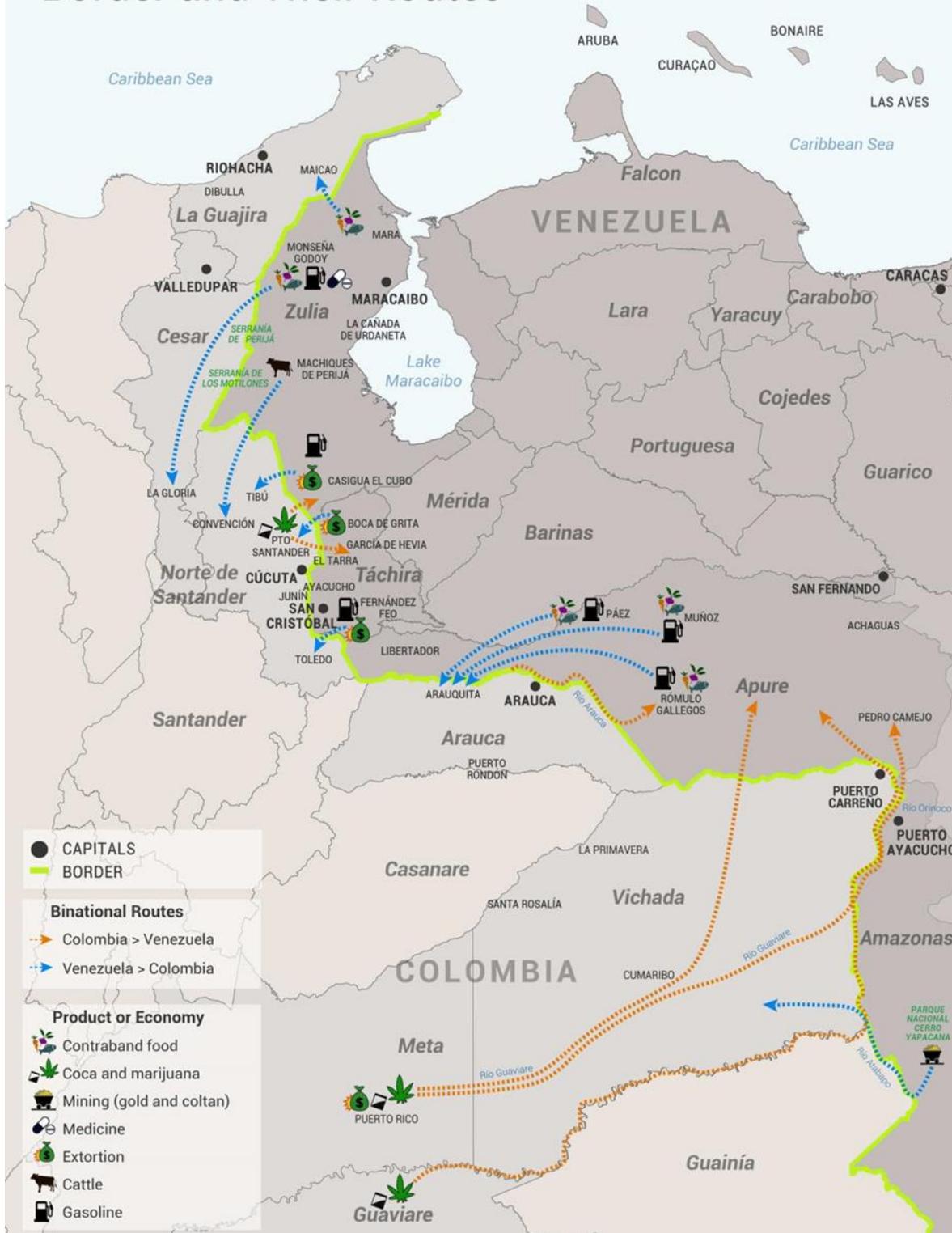
Los otros dos factores definitivos en el tráfico de cocaína son la proximidad a un punto de partida -en este caso la propia Venezuela- y una mano de obra barata para cosechar, procesar y mover los envíos de cocaína. Los venezolanos aportan cada vez más esa fuerza laboral y ahora están preparados para asumir riesgos mucho mayores, por mucho menos dinero, que sus homólogos colombianos. Ahora existe

una amplia y profunda reserva de mano de obra criminal formada por venezolanos desesperados a lo largo de la frontera.

La cocaína colombiana cruza la frontera hacia Venezuela, a lo largo de tres ejes principales: directamente desde el centro de producción en Catatumbo, hacia los estados venezolanos de Táchira y Zulia; a través de los llanos orientales de Colombia hasta el estado de Apure; y a lo largo de los ríos que son las autopistas de las selvas del sur hacia el estado de Amazonas.

No hay cifras claras sobre la cantidad de cocaína que transita por Venezuela, pero dos fuentes de inteligencia internacionales, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que no les sorprendería que superase las 400 toneladas métricas al año. A los precios actuales de 4.000 dólares el kilogramo en Venezuela, esa cantidad de drogas vale 1.600 millones de dólares. Los costos de tránsito por Venezuela se estiman en alrededor de 1.000 dólares, lo que significa que el crimen organizado en esta problemática nación andina podría estar ganando hasta 400 millones de dólares al año, sólo con el tráfico de cocaína.

Illegal Economies on the Colombia-Venezuela Border and Their Routes



Pero la cocaína no es la única economía ilegal a lo largo de la frontera. La gasolina de contrabando, controlada en gran parte por el ELN, es otra actividad ilícita clave en la región. Un litro de combustible de 95 octanos cuesta 6 bolívares (aproximadamente 1/100 de centavo estadounidense) en Venezuela. Sin embargo, en la frontera esa cantidad se vende por 170.000 bolívares (entre 2 y 2,50 dólares).

Cientos de barriles son transportados desde el estado venezolano de Apure al vecino estado colombiano de Arauca con la complicidad de miembros de la Guardia Nacional de Venezuela, cuyo silencio se compra con dinero del silencio.

Por otro lado, en los estados de Amazonas y Bolívar, en el sur de Venezuela, el ELN y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se dedican a la extracción de oro y coltán, exportándolos a través de la frontera hacia los estados colombianos de Guainía y Vichada. Esta empresa ilícita también opera con la complicidad del ejército venezolano e implica la explotación de las comunidades indígenas locales.

Las raciones de alimentos subsidiadas proporcionadas por el gobierno venezolano también se han convertido en una forma de subsistencia utilizada no sólo por los grupos criminales, sino también por los ciudadanos promedio. Desde Apure hasta Arauca, y desde el estado venezolano de Zulia hasta los estados colombianos de La Guajira y Cesar, los alimentos se transportan por rutas clandestinas. La carne de res es un artículo de contrabando común. Aunque se comercializa a un precio inferior al oficial en Colombia, aún genera ganancias importantes porque el costo en Venezuela es muy bajo debido a la gran diferencia en el tipo de cambio y la falta de liquidez.

Sin embargo, la grave escasez de alimentos en Venezuela ha reducido el comercio de contrabando, e incluso ha generado un fenómeno inverso; Los contrabandistas ahora trafican alimentos hacia Venezuela debido a la falta de artículos allí.

El cierre de la frontera en 2015 por parte del presidente Nicolás Maduro fortaleció aún más el control que tenía la Guardia Nacional sobre el contrabando de todo tipo. Los controles fronterizos más estrictos eliminaron a muchos de los contrabandistas de pequeña escala y transfirieron el monopolio criminal al ejército venezolano. Las operaciones de contrabando más pequeñas e independientes encontraron su margen de maniobra muy limitado, mientras que florecían las mafias de mayor escala con estrechos vínculos con la Guardia Nacional.

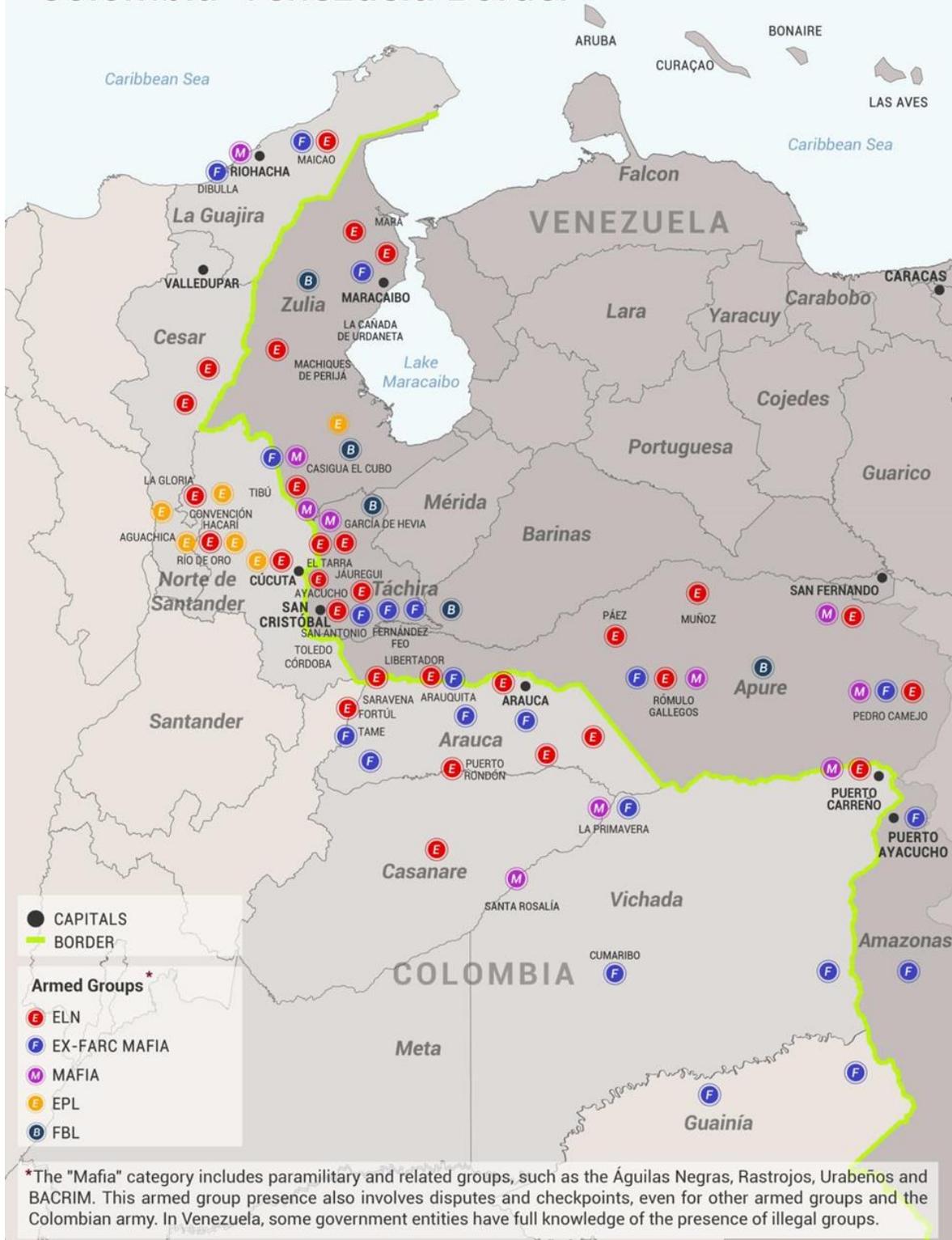
Ahora con la apertura de la frontera las situaciones de manejo de economía ilegal aumentaron fortaleciendo los temas de secuestro y extorción en la frontera.

Santuario criminal

La tolerancia política y la corrupción estatal en Venezuela, combinadas con la proliferación de economías ilegales, han convertido a los estados fronterizos venezolanos en santuarios criminales. Si bien las estructuras del crimen organizado venezolano, tanto estatales como no estatales, se están fortaleciendo, son los grupos colombianos los que tradicionalmente han ejercido más influencia en la región fronteriza de Venezuela. Con la desmovilización de las FARC en 2017, se ha producido un gran cambio en el panorama criminal a lo largo de la frontera.

La tolerancia hacia los grupos rebeldes marxistas colombianos comenzó bajo Chávez. Tanto el ELN como las FARC parecen haber sido tolerados, si no apoyados activamente, por Venezuela durante el gobierno de Chávez. Consideraba a estos grupos como aliados ideológicos., aunque su actitud hacia ellos era compleja, y corría frío y calor según le convenía. Chávez permitió que ambos grupos usaran territorio venezolano, pero también actuó contra ellos cuando era conveniente. Bajo Maduro, Venezuela jugó un papel importante en el proceso de paz con las FARC, pero aparte de eso no ha habido evidencia de que él apoyara la presencia rebelde en Venezuela. Sin embargo, la lucha de Maduro por la supervivencia política ha acaparado toda su atención, lo que significa que los grupos colombianos en suelo venezolano han enfrentado poca resistencia del gobierno y se les ha permitido prosperar.

Presence of Armed Groups on the Colombia-Venezuela Border



EI ELN

Quizás el grupo colombiano más grande que opera hoy en territorio venezolano sea el ELN. Durante más de 30 años, el ELN ha visto gran parte de su liderazgo y retaguardia basados en los estados venezolanos de Apure y Zulia, con una expansión más reciente a Táchira y Amazonas.

La división de combate más poderosa del ELN, el Frente de Guerra Oriental, tiene su base en el estado fronterizo de Apure y su contraparte colombiana, Arauca. Hasta el 90 por ciento de la capacidad de combate y la logística del Frente de Guerra Oriental se encuentran en Apure. Hay otros lugares confirmados del ELN en los municipios de Páez, Rómulo Gallego y Muñoz en Apure, donde los rebeldes realizan operaciones de contrabando.

Del lado venezolano de la frontera también han registrado la presencia del ELN en Táchira, particularmente en el municipio de Fernández Feo, donde los habitantes locales han visto a rebeldes caminando vestidos de civil, pero portando rifles y armas pequeñas. Otras fuentes han confirmado la presencia del ELN en los estados de Amazonas y Bolívar. En Zulia, sólo las fuerzas de seguridad colombianas mencionaron la presencia del ELN, aunque residentes locales en el municipio de Tibú, Norte de Santander, han hablado de rebeldes del ELN cruzando la frontera. Incluso ha habido informes de que el ELN repartió material de propaganda en las escuelas y paquetes de alimentos del gobierno en Venezuela.

El Frente de Guerra Oriental ha estado históricamente liderado por Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias "Pablito", quien ingresó en 2015 al máximo órgano del ELN, el Comando Central (COCE). Actualmente es el jefe militar del grupo. Ha utilizado su santuario en Apure para fortalecer el Frente de Guerra Oriental y lanzar ataques contra Colombia. Se cree que desde hace algunos años reside en una finca de El Nula, expropiada por el presidente Chávez.

Los Líderes del ELN en esta zona se oponen a las conversaciones de paz con el gobierno colombiano, al considerar que las "condiciones actuales no favorecen las negociaciones". El ELN se está expandiendo desde sus bastiones en Apure y Arauca hacia los estados venezolanos de Táchira y Amazonas, así como hacia el estado de Vichada en el lado colombiano. Ha estado llenando el vacío dejado por los rebeldes desmovilizados de las FARC, buscando no sólo absorber territorio, sino también las economías ilegales que anteriormente sustentaban a las FARC.

Si bien el grupo está ampliando sus finanzas y su personal, otros elementos radicales del ELN no ven ningún beneficio en negociar la paz con el gobierno colombiano. Venezuela es un factor clave en este pensamiento del ELN.

Disidentes de las FARC

Si bien las FARC como actor nacional con estatus beligerante han desaparecido, hay crecientes facciones disidentes extendiéndose por todo el país, y Venezuela se

está convirtiendo en una zona de retaguardia y fuente de financiación para algunos de estos elementos.

Gener García Molina, alias "Jhon 40", uno de los narcotraficantes más notorios de las FARC y exjefe del Frente 43 de los rebeldes en el central departamento colombiano de Meta, ha establecido una base al otro lado de la frontera en el Estado venezolano de Amazonas, con elementos del Frente "Acacio Medina". Jhon 40 estuvo alguna vez a cargo de las finanzas del Bloque Oriental de las FARC, que operaba en siete departamentos colombianos: Arauca, Casanare, Meta, Guaviare, Vaupés, Vichada y Guainía. También tuvo relaciones con varios narcotraficantes brasileños y colombianos, incluido Daniel "El Loco" Barrera, arrestado en Venezuela en 2012. Por lo tanto, Jhon 40 tiene un amplio conocimiento del tráfico de drogas, contactos internacionales y quizás dirige sus propias rutas de cocaína.

Al trasladarse a Amazonas, Jhon 40 puede recibir cargamentos de droga que se desplazan a través de los Llanos Orientales de Colombia, donde tienen su bastión los disidentes del Primer Frente de las FARC, así como a lo largo de los ríos que desembocan en las selvas de la triple frontera de Colombia, Venezuela y Brasil. Es probable que Jhon 40 también esté dirigiendo, o al menos "gravando", las operaciones mineras ilegales en Amazonas, que incluyen oro y coltán.

El exgobernador de Amazonas, Liborio Guarulla, denunció la actividad de las FARC y el ELN en el estado de Amazonas, y recientemente el gobierno de Maduro le prohibió participar en la política .

Jhon 40 es sólo un elemento de la creciente disidencia de las FARC, probablemente encabezada por Miguel Botache Santanilla, alias "Gentil Duarte", quien fue expulsado de las FARC a fines del año pasado. Es el líder disidente de más alto perfil. Estos disidentes tienen su base en Guaviare, partes de Meta y Vichada, así como en el departamento selvático de Guainía. Venezuela es ahora un salvavidas económico y un santuario para muchos de los disidentes de las FARC el número total de combatientes y milicianos de las FARC aún activos podría ascender a 2.500, y Venezuela es una importante zona estratégica de retaguardia y centro financiero para ellos.

EI EPL

Otro grupo colombiano que avanza hacia Venezuela es el último remanente del Ejército Popular de Liberación (EPL), llamado "Los Pelusos" por el gobierno para evitar reconocer sus raíces guerrilleras. El EPL se desmovilizó oficialmente en 1991, y esta última facción en Norte de Santander se ha convertido en un actor importante en el tráfico de drogas a lo largo de la frontera con Venezuela. A raíz de la desmovilización de las FARC en 2017, el EPL ha emprendido una expansión agresiva , declarando la guerra al ELN y expandiéndose fuera de su bastión en el Catatumbo.

El grupo se vio debilitado por la muerte en 2015 del exlíder Víctor Ramón Navarro, alias “Megateo”, y el arresto en 2016 de Guillermo León Aguirre, alias “David León”. Megateo dirigía el narcotráfico para el ELN y las FARC desde el Catatumbo. Pero ese vacío fue llenado por un individuo que utilizaba el alias “Pácora”, a quien las autoridades aún no han podido identificar. Pácora lidera la expansión del EPL, incluidas incursiones en Venezuela destinadas a asegurar las rutas del narcotráfico, fortalecer las capacidades militares, reclutar a ex miembros de las fuerzas de seguridad y entrenar francotiradores. Ha habido informes de presencia del EPL en la localidad de El Cubo, en el estado venezolano de Zulia.

Grupos Armados

Desde la desmovilización en 2006 las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), se ha desarrollado una plétora de grupos criminales colombianos, inicialmente llamados BACRIM (“bandas criminales”) por el gobierno, pero ahora designados como Grupos Armados Organizados (GAOs). De ellos, dos tienen presencia significativa en Venezuela: los Rastrojos y los Urabeños.

De hecho, ha habido enfrentamientos entre los dos grupos en territorio venezolano mientras buscan el control de los corredores de contrabando. Sin embargo, la fragmentación de estos grupos ha significado que se vean cada vez más eclipsados a lo largo de la frontera venezolana por los disidentes del ELN, el EPL y las FARC, y en muchos casos ahora trabajan en conjunto con estos grupos rebeldes, así como con elementos corruptos del Fuerzas de seguridad venezolanas.

La FBL

Uno de los principales actores venezolanos irregulares activos a lo largo de la frontera son las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL), un extraño fenómeno de un grupo rebelde progubernamental, inspirado en el ejemplo colombiano. Si bien inicialmente el FBL trabajó estrechamente con el ELN, el FBL ahora ve al ELN como una competencia, ya que el ELN tiene una presencia muy fuerte en el lado venezolano de la frontera. En los últimos años, las FBL han tenido mucho más contacto con las FARC y, de hecho, el Defensor del Pueblo en Arauca los describió como “hijos de las FARC”.

El FBL, que cuenta con entre 1.000 y 4.000 miembros, se dedica a la extorsión y participa activamente en la política local, supuestamente recibiendo financiación a través de consejos comunales (concejos comunales), una invención de la era de Chávez destinada a permitir un mayor grado de participación directa de los ciudadanos en la gobernanza local. Fuentes en Venezuela han afirmado que las FBL tienen vínculos con el tráfico de drogas, pero no hemos encontrado pruebas concretas de ello. La presencia del FBL se ha registrado en los estados Apure, Táchira, Barinas, Zulia, Mérida, Portuguesa, Cojedes y Carabobo, además de Caracas. Es posible que las FBL hayan recibido apoyo material y entrenamiento de las FARC en el pasado. Con informes de presencia disidente de las FARC en

Venezuela, parte de esto puede ser el resultado del trabajo con elementos del FBL.

Venezuela ha avanzado en términos criminales y ahora es un socio igualitario en muchas economías criminales. Las economías criminales a lo largo de la frontera son por naturaleza transnacionales. Por lo tanto, cualquier respuesta significativa a ellos debe ser también transnacional. Sin embargo, ahora hay muy poca colaboración bilateral entre Venezuela y Colombia, lo que permite que el crimen organizado transnacional rija libremente.

Entonces, que se puede esperar actualmente un aumento en el flujo de cocaína hacia Venezuela, a medida que el cultivo de coca en Colombia continúa creciendo; un fortalecimiento de todos los grupos ilegales de Colombia en suelo venezolano; y venezolanos desesperados que son reclutados por los grupos ilegales y el crimen organizado de Colombia mientras luchan por sobrevivir con pocas alternativas legales. Todo esto se suma a un fortalecimiento de las economías criminales a lo largo de la frontera, con el crimen organizado transnacional estableciendo raíces aún más profundas en esta problemática región. Así se puede ver el crecimiento de este modelo en latino América un ejemplo es como una de las organizaciones que se aprovechó de esto fue una red colombo-venezolana que operaba a lo largo de las fronteras compartidas del país. Estaba dirigido por José Evaristo Linares Castillo, un antiguo asociado de Daniel “El Loco” Barrera , quien, junto con su otro asociado, Pedro Oliveiro Guerrero, alias “Cuchillo ”, utilizó sus redes criminales en Colombia para facilitar el movimiento de cocaína a través de Venezuela. Mientras que Barrera y Guerrero estaban asociados con grupos paramilitares de derecha, se alegaba que Linares trabajaba con las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

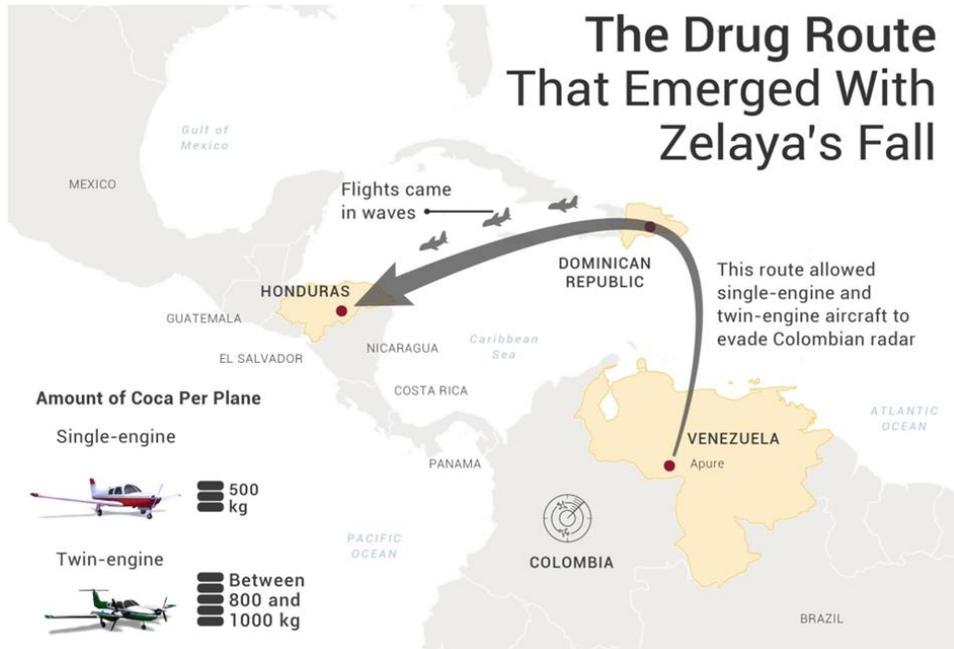
La red de Linares incluía a un ex carnicero de mediana edad nacido en Colombia llamado Gersain Viáfara Mina. Viáfara Mina era originaria de Cali, Colombia, pero se había reasentado en el estado fronterizo de Apure, Venezuela. Y cuando Zelaya fue destituido del poder, Viáfara Mina manejaba cargamentos de cocaína que se movían desde Venezuela a través de Honduras para Linares y otros. En documentos judiciales presentados por el gobierno de Estados Unidos acusando a Viáfara Mina de tráfico de drogas, una declaración jurada de un agente de la Agencia Antidrogas (DEA) dice que Viáfara Mina coordinó numerosos vuelos entre los dos países.



Gersain Viáfara Mina

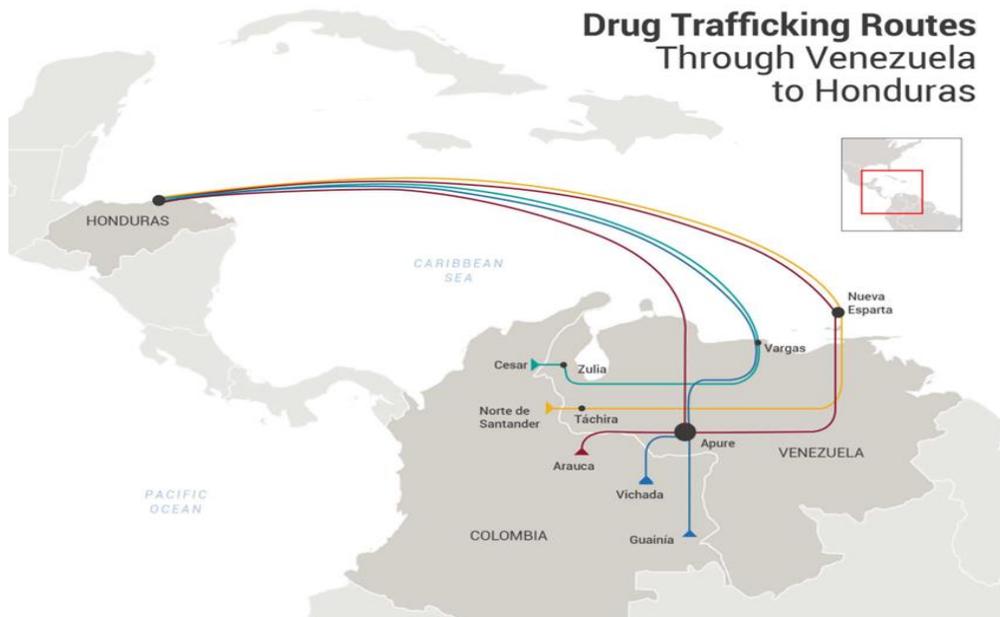
“Viafara-Mina hizo arreglos para enviar la cocaína desde Apure, Venezuela a Centroamérica a través de fuentes que suministraban cocaína, aviones y pistas de aterrizaje clandestinas para facilitar las operaciones de contrabando de cocaína”, se lee en la declaración jurada, escrita por el agente Kimojah Brooks.

Estos vuelos saldrían de Apure, volarían hacia el norte hacia República Dominicana y luego girarían bruscamente a la izquierda a lo largo del paralelo 15, que ingresa a Centroamérica por la frontera entre Honduras y Nicaragua. La ruta permitió a estos aviones monomotor y bimotor evitar la detección de radares con base en Colombia. Los vuelos llegaban en oleadas. Cada motor transportaba, en promedio, 500 kilogramos; cada bimotor soportaría entre 800 kilogramos y una tonelada.



Las pistas aéreas continuaron proliferando en 2010, afirmó la evaluación anual del Departamento de Estado sobre el tráfico de drogas en la región en 2011. “La Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta Sur (JIATF-S) registró 75 vuelos sospechosos a Honduras durante el año, en comparación con 54 en 2009 y 31 en 2008 y en la actualidad se ha triplicado el tema.

El informe decía que la mayoría eran de Venezuela. Si hubiera 100 [vías aéreas]”, probablemente 95 venían de Venezuela”.



El punto de partida también permitió a Viáfara Mina y su equipo establecer contacto con su red de apoyo, que incluía a las FARC y posiblemente a partes del ejército venezolano. Las FARC “proporcionaron seguridad en la pista de aterrizaje” en Apure.

En las reuniones entre Viáfara Mina y miembros del ejército de Venezuela le daban acceso a códigos transpondedores que podían ser utilizados por los pilotos para volar en el espacio aéreo de ese país y acceder a pistas clandestinas utilizadas en conexión con el transporte de grandes cantidades de cocaína.

Viáfara Mina fue capturado en 2015, cuando cruzó a Colombia para comprar una luz para su auto. Fue extraditado ese mismo año a Estados Unidos, lo que provocó más efectos en cadena en las relaciones entre Venezuela y sus vecinos. Según se informa, la extradición causó conmoción en la frontera entre Venezuela y Colombia, donde las autoridades venezolanas cerraron temporalmente el paso a Colombia en supuesta represalia por la extradición de Viáfara Mina y otro presunto traficante colombiano, a quien El Tiempo identificó como “un testigo clave contra uniformados [venezolanos]”. personal vinculado a intereses ilícitos”.

El impacto en Honduras

Corría también 2015, el mismo año de la detención de Viáfara Mina, cuando una de las redes hondureñas vinculadas al puente aéreo de la cocaína se desmoronó, llevándose consigo el vasto entramado político y económico que había creado. En algún momento de enero de 2015, Javier y Devis Rivera Maradiaga, los dos hermanos que habían creado un grupo criminal conocido popularmente como Los Cachiros, fueron a una isla del Caribe y se entregaron a las autoridades estadounidenses. Fueron acusados de tráfico de drogas y rápidamente comenzaron a cooperar con las autoridades estadounidenses para reducir sus sentencias y sacar a algunos miembros de su familia de Honduras.

Los Cachiros habían surgido como ladrones de ganado en el estado oriental de Colón en la década de 1970. Desde el principio, habían establecidos vínculos con familias de élite, como el clan Rosenthal, a quienes podían vender su ganado. La familia Rosenthal comenzó con compañías de seguros en la década de 1930, pero luego se expandió a sectores como el envasado de carne, el sector inmobiliario, la agricultura, la ganadería, los productos lácteos, el turismo, la banca, la televisión, las telecomunicaciones y otros negocios. En la década de 1970, eran una de las familias más ricas de Honduras. A finales de la década de 1980, Jaime Rosenthal Oliva, el patriarca de la familia, era un miembro destacado del Partido Liberal y vicepresidente del país. En la década de 1990, la familia era una de las más ricas y poderosas de toda Centroamérica.

Durante ese mismo período, la cartera criminal de Los Cachiros creció hasta incluir el tráfico de drogas. Los Cachiros eran particularmente hábiles en establecer redes que pudieran recibir y transportar cocaína desde las costas y pistas de aterrizaje clandestinas del este de Honduras hacia Guatemala. En 2004, tras una pelea con

su principal rival, los Cachiros emprendieron una misión de búsqueda y destrucción por tres países antes de alcanzarlo en una prisión de Honduras, donde lo mataron.

En 2009, el año en que Zelaya fue destituido sin ceremonias del poder, Los Cachiros eran uno de los grupos de transporte ilícito más grandes del país. Tenían equipos de colaboradores en toda la zona que organizaban los aterrizajes de las aeronaves, instalaban las luces en las pistas clandestinas, descargaban la mercancía ilícita y la trasladaban a un lugar seguro. También establecieron conexiones locales (incluso con la policía, los políticos locales y las autoridades judiciales) para garantizar que las drogas no fueran confiscadas o, si lo fueran, que pudieran recuperarse a un costo mínimo.

El precio que los Cachiros cobraban por este servicio era de aproximadamente 2.000 dólares por kilogramo de cocaína, la diferencia en el costo de la cocaína entre Nicaragua y Guatemala. Las sumas de dinero generadas por este negocio eran inmensas, especialmente para un lugar como Honduras. Las autoridades hondureñas estimaron que cuando comenzaron a confiscar las propiedades de Los Cachiros en 2013, el grupo había acumulado hasta 800 millones de dólares en activos, o aproximadamente la mitad del monto total del principal producto de exportación del país, el café, durante un año determinado.

A medida que crecieron los negocios ilícitos de los Cachiros, también crecieron sus conexiones y su capacidad para penetrar los niveles más altos de la vida política. A principios de la década de 2000, los Cachiros habían forjado vínculos con los Rosenthal y otras élites en la banca, los hoteles, la agroindustria y a través de un equipo de fútbol que ayudaron a financiar. Utilizaron sus negocios legítimos para obtener contratos estatales para construir y mantener carreteras, así como para trabajar en otros proyectos de infraestructura. Y se convirtieron en socios comerciales de la entonces primera familia y posiblemente de la futura primera familia.

Después de que los hermanos Rivera Maradiaga se entregaran a las autoridades estadounidenses, las consecuencias para estas élites que habían trabajado con los Cachiros llegaron rápidamente. En mayo de 2015, en una operación coordinada con las autoridades haitianas, las autoridades estadounidenses arrestaron a Fabio Lobo, hijo del ex presidente Porfirio Lobo, el mismo hombre que había ganado las controvertidas elecciones de noviembre de 2009 tras el derrocamiento de Zelaya. En octubre de 2015, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a tres miembros de la familia Rosenthal y a un abogado de su conglomerado empresarial de blanqueo de dinero relacionado con la corrupción y las redes de narcotráfico.



Fabio lobo

El caso de Lobo fue particularmente perjudicial para su familia. Fue llevado a Estados Unidos, donde se declaró culpable. En su audiencia de sentencia, Devis Rivera Maradiaga, el más joven de los dos Cachiros que se habían entregado a las autoridades en el Caribe, testificó en un tribunal de la ciudad de Nueva York que el padre de Lobo había recibido sobornos por cientos de miles de dólares del grupo en regresar con la promesa de que el gobierno no los extraditaría a los Estados Unidos y que Fabio Lobo había trabajado estrechamente con él para asegurar y transportar al menos dos cargamentos de cocaína desde el área de Colón hasta la frontera con Guatemala. En su testimonio, Rivera Maradiaga también implicó al hermano del actual presidente Juan Orlando Hernández para asegurar dinero adeudado a una de sus empresas.

Los hermanos Rivera Maradiga también fueron vinculados al caso de los "sobrinos narco" de Venezuela. Supuestamente los Cachiros también estaban conectados con Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, sobrinos de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores.



Ilustración: Elizabeth Williams

Se confirmó que se preveía una ruta vía Honduras, y que los familiares del presidente venezolano sí tenían vínculos con grupos criminales centroamericanos. Para más detalles sobre este caso, consulte el capítulo sobre el 'Cártel de los Soles'.

Lo que está claro es que el derrocamiento de Zelaya condujo a la creación de una de las principales rutas de cocaína desde Sudamérica hacia Estados Unidos. Esta ruta dependía de sofisticadas estructuras de narcotráfico en Venezuela y de un camino de mínima resistencia a través de Honduras.

Los narcotraficantes tienen problemas para exportar drogas desde Venezuela. Hay pocos vuelos comerciales, poco transporte de contenedores, ningún turista y un sector pesquero colapsado. Pero República Dominicana, a 1.400 kilómetros de distancia, lo tiene todo.

Mientras la cocaína fluye en gran medida sin oposición a través de la frontera desde Colombia, con una producción en la nación andina en un nivel récord, el crimen organizado ha desarrollado uno de los ductos de drogas más prolíficos de la región hacia la República Dominicana. Si bien hay algunos vuelos ilegales que pasan por allí, la mayor parte de la droga cruza el Caribe en lanchas rápidas. La República Dominicana ofrece al narcotráfico algunos de los puertos de contenedores más grandes del Caribe, un animado sector turístico con vuelos comerciales en todo el mundo y un sector inmobiliario y bancario en auge, listo para lavar narcodólares.

La ruta del Caribe había caído en desgracia desde los embriagadores días del Cartel de Medellín, cuando Pablo Escobar y sus asociados utilizaban la isla de Norman's Cay en las Bahamas para reabastecer de combustible los aviones cargados de

cocaína con destino a Estados Unidos. A mediados de la década de 1980, más del 75 por ciento de la cocaína incautada en su camino a Estados Unidos procedía del Caribe. En 2010, esa cifra se había reducido al 10 por ciento, y Centroamérica registraba más del 80 por ciento de las incautaciones.

La razón del resurgimiento en el Caribe se explica por dos factores: una mayor inversión estadounidense en la guerra contra las drogas en Centroamérica y México, y la creciente importancia de Venezuela como centro regional de cocaína.

Estados Unidos ha dedicado recursos a través de la Iniciativa Mérida en México, que comenzó en 2008, y la Iniciativa de Seguridad Regional de América Central (CARSI), que ha estado inyectando dinero principalmente a las naciones del Triángulo Norte de El Salvador, Honduras y Guatemala. Esto también ha tenido un efecto en el puente aéreo de cocaína desde Venezuela a Honduras, empujando más cargamentos de droga hacia alta mar del Caribe.

Si bien Estados Unidos creó la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe en 2010, en ella se han dedicado muchos menos recursos y se ha prestado mucha menos atención, sin lograr frenar el creciente comercio de cocaína a través del Caribe. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha identificado a la República Dominicana como una de las principales naciones de tránsito para los envíos de cocaína con destino a los Estados Unidos, siendo el tráfico marítimo, que implica el uso de lanchas rápidas y contenedores comerciales, el principal método de contrabando de drogas hacia y de la isla. También fue el país identificado con mayor frecuencia por las agencias europeas como nación de tránsito para los envíos de cocaína con destino a Europa”.

Actualidad República Dominicana

La República Dominicana (RD) se encuentra en el corazón del Caribe. Es la nación más poblada de la región con 10,5 millones de habitantes y tiene su economía más fuerte. Hasta cinco millones de turistas ingresan al país a través de los aeropuertos internacionales y las decenas de cruceros que arriban a sus puertos cada año. Desde el punto de vista comercial, los seis puertos de la República Dominicana la convierten en un centro regional para el transporte de contenedores. Algunos de estos puertos pueden recibir barcos "neo-Panamax", los de mayor tamaño capaces de atravesar el Canal de Panamá.

Santo Domingo es una de las ciudades más antiguas y más grandes del Caribe, y su área metropolitana registra una población de casi tres millones. Cuenta con hoteles, complejos turísticos, restaurantes y casinos de clase mundial, todo lo que un aspirante a narco necesita. La República Dominicana tiene de lejos la mayor economía y PIB del Caribe, además de un mercado inmobiliario en auge, lo que ofrece muchas oportunidades de lavado de dinero.

Para los envíos de cocaína que salen, la República Dominicana tiene una gran cantidad de rutas diferentes que ofrecer. Para el mercado estadounidense está

Puerto Rico, a sólo 381 kilómetros de distancia. Como territorio estadounidense, si los contrabandistas pueden llevar cocaína a esta isla, será más fácil llegar al continente, ya que se encuentra dentro de las barreras aduaneras estadounidenses. Se aplica una dinámica similar con los territorios franceses de Martinica y Guadalupe para los envíos a Europa continental. Los territorios británicos de ultramar como Anguila, las Bermudas y las Islas Vírgenes Británicas, así como antiguas colonias como Jamaica, son trampolines hacia el Reino Unido. Sin embargo, gracias a las ventajas lingüísticas y a una importante diáspora dominicana, España sigue siendo el principal punto de entrada a Europa para las drogas que salen de la República Dominicana. España ha sido tradicionalmente la nación europea con mayores incautaciones de cocaína .

Otra razón por la que la República Dominicana es una nación de tránsito preferida para la cocaína es la creciente sofisticación de las organizaciones narcotraficantes (OTD) nativas. Las estructuras criminales dominicanas solían actuar principalmente como transportadoras de organizaciones colombianas y mexicanas. Aquellos días se han ido. Las OTD dominicanas han pasado a la gran liga. Hoy en día, los dominicanos compran cocaína en Venezuela, contratan a venezolanos para realizar el peligroso viaje a través del Caribe y luego toman el control directo de los cargamentos cuando llegan a la isla. El alcance dominicano no termina aquí. Sus DTO pueden transportar drogas hasta la costa este de Estados Unidos. Allí, una gran diáspora dominicana vende los medicamentos, llegando incluso al nivel minorista. Esto significa que los dominicanos controlan ahora un gran número de eslabones de la cadena de la droga, y son capaces de maximizar sus ganancias por cada kilogramo de droga. Los dominicanos, que trabajan con los cárteles colombianos y mexicanos, también actúan como intermediarios para mafias internacionales que buscan hacerse con grandes cargamentos de cocaína. Las agencias de inteligencia internacionales en Santo Domingo han señalado la creciente presencia de figuras del crimen organizado ruso.

Fuentes policiales estadounidenses admitieron la creciente importancia y alcance de las OTD dominicanas. "Tenemos en este momento entre cuatro y cinco casos de equipos dominicanos de alto nivel que trasladan cantidades significativas de drogas a los Estados Unidos continentales".



La República Dominicana es inmensamente atractiva para los venezolanos que buscan huir de su país en colapso o esconder su dinero fuera del alcance de la hiperinflación y la expropiación gubernamental. La cultura en esta isla caribeña se parece mucho a la de Venezuela, por lo que se sienten como en casa.

Los venezolanos adinerados llevan mucho tiempo invirtiendo en casas de vacaciones y otras propiedades en la República Dominicana. Mientras buscaban proteger sus activos de una posible confiscación en su país de origen, la inversión aumentó. Entre 2010 y 2015, la inversión venezolana en República Dominicana ascendió a 5 mil millones de dólares, principalmente en complejos turísticos, bienes raíces residenciales y comerciales, así como en centros comerciales. Pero pocos venezolanos realmente establecieron su residencia en la isla. Un censo de inmigrantes en la República Dominicana de 2012 encontró que solo 3.434 personas nacidas en Venezuela vivían en el país, 12 años después de que Hugo Chávez llegara al poder.

Sin embargo, esa dinámica cambió después de que el presidente Nicolás Maduro asumió el poder y el país quedó sumido en una crisis económica en 2013. Los primeros en llegar a República Dominicana fueron venezolanos de clase alta y media que huían de la incertidumbre. Generalmente fundaron empresas de servicios de tamaño mediano y consiguieron empleos como profesionales. Pero últimamente el arroyo se ha convertido en una inundación. Muchos de los que

llegaron más tarde ingresaron a la economía informal, vendiendo tortas de maíz venezolanas conocidas como "arepas" y comida rápida en las esquinas, se dedican al trabajo sexual o conducen taxis. La llegada de venezolanos por los aeropuertos dominicanos aumentó en 2016 un 40 por ciento respecto al año anterior, para un total de 142.540 personas, aunque no hay datos claros sobre cuántos fueron con fines turísticos y cuántos se quedaron.

En un intento por frenar el flujo, en diciembre de 2016, el gobierno dominicano anunció nuevas restricciones a los venezolanos que llegan como turistas, como prueba de medios económicos o reservas de hotel pagadas. Una fundación que ayuda a los inmigrantes venezolanos en la República Dominicana estimó que actualmente hay hasta 200.000 venezolanos residentes.

Varias fuentes dominicanas señalaron que venezolanos vinculados al gobierno de Maduro están comprando villas de lujo en complejos turísticos de primer nivel como la Casa de Campo en La Romana, posiblemente adquiridas con ganancias mal habidas en el narcotráfico o el saqueo cleptocrático de las arcas estatales.

Fuentes estadounidenses afirmaron que estructuras criminales venezolanas ahora están presentes en República Dominicana, trabajando con sus homólogos dominicanos, mexicanos y colombianos. En realidad, controlan organizaciones importantes, orquestan el blanqueo de dinero, el movimiento de la cocaína, el transporte e incluso la distribución

Si a esto le sumamos los altos niveles de corrupción entre la clase política y las fuerzas de seguridad, la República Dominicana tiene el potencial de ser un paraíso para el narcotráfico.

Rutas De Venezuela a República Dominicana

En línea recta, la República Dominicana está a unos 1.400 kilómetros de la costa norte de Venezuela. Los narcotraficantes utilizan esta ruta directa, enviando lanchas rápidas cargadas con hasta una tonelada de cocaína desde las penínsulas de la Guajira y Paraguaná. La península de Paraguaná en particular, ubicada a sólo 27 kilómetros de la isla de Aruba, todavía cuenta con infraestructura capaz de construir y mantener embarcaciones, utilizadas no sólo para transportar turistas, sino también para alimentar un floreciente comercio de contrabando entre Aruba y el continente venezolano.

Otra ruta que siguen las embarcaciones cargadas de droga es la de ir de isla en isla a través del archipiélago caribeño. Hay 834 kilómetros desde Venezuela hasta Trinidad y Tobago, y desde allí se alinean islas hasta Cuba, entre ellas Granada, Martinica y San Cristóbal y Nieves. Luego llegas a las islas grandes, comenzando con Puerto Rico y La Española, que comparten la República Dominicana y Haití, y finalmente Jamaica, antes de llegar a la isla más grande del Caribe, Cuba.

Quizás el escándalo de drogas venezolano reciente más emblemático sea el de los “sobrinos narco”. Francisco Flores de Freitas y Efraín Campos fueron condenados en noviembre de 2016 por un tribunal de Nueva York por conspirar para traficar 800 kilogramos de cocaína a Estados Unidos.

Son sobrinos de la Primera Dama de Venezuela, Cilia Flores. Fueron arrestados originalmente en Haití, vecino de la República Dominicana, donde habían sido trasladados en un avión pilotado por un miembro de la Guardia Nacional de Venezuela. Una vez allí, tenían la intención de recibir un pago inicial por un negocio de drogas, que involucraba cocaína supuestamente proporcionada por el grupo rebelde colombiano en gran parte desmovilizado, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La conexión dominicana quedó probada con una redada en una mansión propiedad de Francisco Flores en un lujoso complejo turístico dominicano, donde se sacaron 127 kilogramos de cocaína y 10 kilogramos de heroína de un yate de 135 pies llamado “El Reino”, atracado al costado.

A finales de 2016, 10 narcotraficantes fueron capturados a bordo de un avión Lear que llegaba a República Dominicana con 450 kilogramos de cocaína. La aeronave pertenecía a Aeroquest, empresa propiedad de José Gregorio Vielma Mora, gobernador del estado venezolano de Táchira, en la frontera con Colombia, y miembro del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela.

A mediados de 2016, un capitán del ejército venezolano, Yazenky Antonio Lamas Rondón, también relacionado con la primera dama Cilia Flores, fue arrestado en Colombia por una acusación estadounidense, acusado de haber realizado más de cien narcovuelos en la última década, muchos de ellos a la República Dominicana. Los aviones fueron enviados sin carga desde México al estado venezolano de Apure, fronterizo con Colombia. Los aviones fueron recibidos por Lamas, quien luego los cargó con cocaína y los envió a República Dominicana, Haití y las Bahamas. Lamas fue extraditado a Estados Unidos en julio de 2017.

El director de Interpol de Venezuela, Eliecer García Torrealba, fue arrestado por las autoridades venezolanas y acusado, en abril de 2016, de organizar el transporte de un cargamento de cocaína a la República Dominicana. García Torrealba presuntamente utilizó su cargo para coordinar la carga y despegue de un avión desde el aeropuerto de la ciudad de Barquisimeto, capital del estado Lara. Cinco agentes de policía y tres guardias de seguridad del aeropuerto también participaron en la preparación del Cessna para partir con cocaína a bordo. Los ciudadanos venezolanos Juan Lanz Díaz y Pablo Cárdenas supuestamente financiaron la operación. Cárdenas también fue vinculado con otro cargamento de 349 kilogramos de cocaína que fueron incautados en el aeropuerto de La Romana, en República Dominicana, en marzo de 2016.

En abril de 2015, cuatro miembros de la Guardia Nacional de Venezuela y un destacado empresario fueron arrestados en Venezuela en relación con un cargamento de 450 kilogramos de cocaína transportado en un avión privado desde Venezuela a la República Dominicana. La droga fue incautada por la policía

antidrogas dominicana. Los cinco pasajeros del avión privado, todos ciudadanos venezolanos, fueron detenidos en la República Dominicana, al igual que cuatro miembros del ejército dominicano, entre ellos un capitán y un teniente.

Verny Troncoso, fiscal principal a cargo de casos de narcóticos en la provincia de Santo Domingo, dijo que cada semana desde finales de octubre de 2016, los funcionarios han arrestado a tres o cuatro venezolanos que llegan a los aeropuertos del país con drogas ingeridas o escondidas en maletas. Todos llegan en un vuelo diario de Acerca directo desde Caracas al aeropuerto Las Américas de Santo Domingo.

Las autoridades nunca habían detectado mulas procedentes de Venezuela. Los venezolanos ahora representan el 90 por ciento de las mulas de drogas capturadas en la República Dominicana, según una fuente de la agencia de control de drogas de la República Dominicana (Dirección Nacional de Control de Drogas – DNCD). En promedio, los venezolanos que han ingerido drogas traen un kilogramo de cocaína, o si la llevan en una maleta, un promedio de cinco kilogramos dijo la misma fuente.

Durante el interrogatorio, varias de las mulas le dijeron que las llevaron a través de la frontera de Venezuela a Colombia para cargar drogas (ya sea ingeridas o empaquetadas en su equipaje). Luego salieron del aeropuerto internacional de Caracas. El viaje a Caracas desde el Catatumbo en Colombia, donde la coca está en auge, dura más de 10 horas, y toma un tiempo similar desde la Guajira colombiana: demasiado tiempo para que las mulas se arriesguen a tener la droga en el estómago. Esto podría significar que están abordando vuelos nacionales en los estados fronterizos de Venezuela, sin ser detectados ni molestados, y haciendo conexiones con la República Dominicana a través del aeropuerto internacional de Caracas.

La operación de mulas está dirigida en gran medida por colombianos y dominicanos residentes en Venezuela, según Troncoso. La mayoría de las mulas capturadas en el aeropuerto de República Dominicana dijeron que se vieron obligadas a transportar la droga debido a la desesperada situación económica en su país, dijo Troncoso. También dijo que la misma dinámica estaba detrás de un aumento en el número de venezolanos que tripulaban lanzamientos de drogas rápidas. Los indicios actuales muestran que entre tres y cuatro de cada cinco lanchas rápidas que llegan cerca de República Dominicana incluyen tripulantes venezolanos.

La escala de la ruta marítima entre Venezuela y la República Dominicana es difícil de estimar, pero hablando con funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de los Estados Unidos, el Reino Unido y la República Dominicana, elaboramos una imagen de alrededor de tres lanchas rápidas entrando en aguas dominicanas cada semana, transportando entre 700 kilogramos y una tonelada de cocaína. Con estas cifras se podría estimar que sólo por la ruta marítima desde Venezuela ingresan a la isla caribeña 9,5 toneladas de cocaína al mes, o 115 toneladas al año. A esto se suman los contenedores “contaminados” que pasan por los puertos de República Dominicana.

El vicealmirante Félix Pimental, jefe de la DNCD, dijo que por la isla pasan al menos 120 toneladas de cocaína cada año, un enorme porcentaje de las cuales va a Europa. Se trata de una cantidad extraordinaria de drogas, equivalente a alrededor del 15 por ciento de la producción mundial anual de cocaína.

El monto promedio que el crimen organizado dominicano cobra a los traficantes por transitar la isla es de 1.400 dólares por kilogramo. Eso significaría que el crimen organizado dominicano está ganando más de 200 millones de dólares al año. La cifra real seguramente será mucho mayor, pues en muchos casos los dominicanos son dueños de los cargamentos de cocaína y venden cada kilogramo a más de 25.000 dólares en Estados Unidos o 35.000 dólares en Europa. También están manejando un importante flujo de heroína y fentanilo que pasa por la isla.

El futuro

Incluso si el presidente Maduro es derrotado en las próximas elecciones, es poco probable que las condiciones en Venezuela cambien rápidamente. Esto significa que es probable que el narcotráfico hacia la República Dominicana crezca y se fortalezca, ciertamente en el corto plazo. Si bien las autoridades estadounidenses como la Administración para el Control de Drogas (DEA) están muy conscientes del flujo de narcóticos, es poco lo que pueden hacer, ya que no están presentes oficialmente en Venezuela y no reciben cooperación de las autoridades venezolanas.

La interdicción en todo el Caribe es difícil. Las lanchas rápidas suelen partir al anochecer y luego, cuando sale el sol, cubren las embarcaciones con lonas de color verde azulado, haciéndolas casi invisibles. Cuando vuelve a caer la oscuridad continúan su viaje. Cuando se acercan a República Dominicana, son recibidos por traficantes dominicanos en el mar, quienes trasladan las cargas. Las tripulaciones, en su mayoría venezolanas, regresan luego al continente sudamericano. Y el proceso se repite.

Lo interesante es que la gran mayoría de las incautaciones de cocaína se producen en el camino hacia la República Dominicana. Esto significa que una vez en la isla, el crimen organizado puede mover y exportar cargamentos de droga con relativa facilidad y seguridad. Esto sugiere corrupción de alto nivel en las autoridades locales, la agencia nacional antidrogas y las autoridades portuarias, incluyendo tal vez a altos cargos políticos. Casi todas las fuentes consultadas coincidieron en esto, pero se mostraron reticentes a dejar constancia de ello.

Cuanto más tiempo permanezca activo este oleoducto de cocaína, más sofisticadas y poderosas se volverán las OTD dominicanas y venezolanas. La República Dominicana ya no es sólo un punto de transbordo, sino un lugar donde las mafias internacionales pueden comprar grandes cargamentos de droga. Esto significa que la República Dominicana evolucionará como un centro cosmopolita del narcotráfico, con una creciente presencia criminal venezolana. Ya hay evidencia de que las OTD aquí no están restringidas por fronteras nacionales, tienen socios de muchas

naciones diferentes y pueden cambiar sus patrones de contrabando y modus operandi para evitar la detección de las autoridades.

Relación económica con El Salvador

José Luis Merino es una de las figuras más poderosas del partido político gobernante de El Salvador y jugó un papel clave en la fundación de ALBA Petróleos, una subsidiaria de la compañía petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela SA, cuya red comercial ha hecho que muchos salvadoreños éliticos ricos, pero también tiene vínculos con la corrupción y otros delitos.

Petróleos de Venezuela SA (PdVSA), que reportó 2.500 millones de dólares en ingresos en 2015, ha apoyado una red que enriqueció a muchas personas cercanas al régimen salvadoreño a tasas alarmantes y ha servido como base para expandir el modelo de alianza petrolera Petrocaribe. Sin embargo, también ha trabajado en estrecha colaboración con empresas que han sido investigadas por corrupción y lavado de dinero.

Petrocaribe es una iniciativa geopolítica y económica iniciada por Hugo Chávez en 2005 para fortalecer las alianzas regionales a través del comercio petrolero. El capítulo de El Salvador en la historia de la alianza ilustra cómo el financiamiento para las importaciones de combustibles fósiles de PdVSA se utilizó para expandir el poder económico y político del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el actual partido político gobernante de El Salvador. fiesta.

La relación entre ALBA Petróleos, PdVSA y el FMLN –y su influencia en la política de El Salvador– ha durado una década. Sin embargo, en los últimos meses, la presencia de Merino, alias “Comandante Ramiro”, y la importancia del ALBA en la economía salvadoreña han disminuido debido a que los fondos de Venezuela se están agotando en medio de su crisis económica y a que Merino ha perdido el poder que alguna vez tuvo en el FMLN. tras los resultados desfavorables de las elecciones locales.

Fundada en 2006 como una empresa pública-privada, el financiamiento público de ALBA provino de alcaldes salvadoreños a quienes Venezuela prestó millones de dólares entre 2010 y 2015. En los documentos fundacionales de ALBA, muestran que PdVSA es el propietario mayoritario. con el 60 por ciento de las acciones de la empresa, el otro 40 por ciento pertenece a 18 alcaldes del partido FMLN.

Los documentos también abordan las transacciones comerciales de la filial con PdVSA: la mitad de los envíos de petróleo se pagan contra entrega del producto y la otra mitad se financia mediante préstamos a 22 años con tasas de interés entre uno y dos por ciento.

Durante la década pasada, Merino – actualmente miembro de la comisión política del FMLN y viceministro de Relaciones Exteriores en la administración dirigida por el partido – fue el principal intermediario entre el FMLN y el régimen chavista; fue el

encargado de mantener los vínculos entre PdVSA y los gobiernos salvadoreño y venezolano. Cuando el FMLN tomó el poder en El Salvador en 2009, las relaciones políticas con Venezuela ya se habían establecido a través del ALBA, pero se remontan a mucho más atrás. El ex presidente Hugo Chávez a menudo enviaba mensajes amistosos al FMLN y sus dirigentes desde Caracas.

Ahora, los legisladores estadounidenses señalan las conexiones de Merino con Venezuela y PdVSA como evidencia de posibles actividades criminales.

“Múltiples informes de fuentes abiertas indican que las estructuras financieras controladas por el Sr. Merino, Viceministro de Relaciones Exteriores, han adquirido cientos de millones de dólares en riquezas inexplicables mientras ayudaban a las guerrillas de las FARC en Colombia, a elementos corruptos del gobierno venezolano y a otros criminales. grupos mueven fondos a puerto seguro”, afirma una carta fechada el 19 de junio de 2017.¹ Fue firmada por 14 miembros del Congreso de los EE. UU. de ambos lados del pasillo y solicita al Departamento del Tesoro que abra una investigación sobre Merino en virtud de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico.

La sospecha recurrente en Washington es que algunos de los fondos mencionados en la carta hayan sido movidos a través de empresas del ALBA. Si bien el hermano de José Luis, Sigfredo Merino, figura como fundador del ALBA en documentos de la empresa, el comandante Ramiro siempre la ha controlado tras bambalinas como asesor o intermediario. José Luis también ha ejercido de cara pública del ALBA.

La Agencia Antidrogas (DEA) como el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) han designado a José Luis Merino como “persona de interés” en investigaciones relacionadas con ALBA Petróleos. En conjunto con estas investigaciones, Sigfredo Merino fue detenido temporalmente en el Aeropuerto Internacional George Bush en Houston, Texas, en febrero.

Cuando la Superintendencia de Competencia (SC) de El Salvador realizó una investigación de rutina sobre el ALBA en 2013 luego de que solicitara permisos para construir ocho gasolineras, fue José Luis Merino quien habló públicamente en nombre de la empresa. “Estamos preparados para aceptar las sanciones que merecemos”, afirmó el líder del partido FMLN.

También fue el comandante Ramiro quien se enfrentó a la opinión pública en 2013 en medio de denuncias de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) sobre el rápido crecimiento económico de ALBA Petróleos. “Hay cierta preocupación porque ALBA Petróleos se fundó hace siete años con \$1 millón, y ahora tiene \$400 millones –permítanme corregirme– \$800 millones”, dijo Merino.

En 2015, ALBA Petróleos poseía 10 empresas involucradas en una variedad de industrias, desde la venta de alimentos para la aviación hasta la importación de medicamentos, la prestación de servicios financieros y, por supuesto, la distribución

de combustibles fósiles. Ese año, la empresa registró ingresos por 1.100 millones de dólares.

Al explicar al público el rápido crecimiento de las ganancias de ALBA Petróleos, inusual en una economía tan pequeña como la de El Salvador, Merino y otros representantes citaron nuevas inversiones internacionales, el crecimiento de la industria petrolera y la diversificación de su cartera. Sin embargo, el argumento de que una industria petrolera en expansión impulsó el crecimiento de la compañía no es válido porque los años más prósperos del conglomerado, de 2012 a 2015, coinciden con caídas en los precios del petróleo, especialmente en 2014 y 2015, cuando cayeron a la mitad.

Además de las investigaciones de 2013 por presuntas prácticas monopólicas, hasta la fecha no ha habido investigaciones en El Salvador a empresas vinculadas a ALBA Petróleos, a pesar de que algunas se han declarado en quiebra o despidieron a sus trabajadores sin la transparencia requerida.

Por ejemplo, Veca, una aerolínea fundada en 2014 cuya flota incluye solo dos aviones usados comprados a Chipre Airways, despidió a todos sus empleados en 2017, en algunos casos sin pagarles los beneficios exigidos por la ley. ALBA aportó \$60 millones en financiamiento para la creación de la aerolínea.

Documentos financieros de ALBA Petróleos muestran que, en conjunto, el conglomerado casi siempre tuvo más deuda que ganancias; sólo 2013 y 2014 registraron superávits. La deuda es solo una parte de su pasivo y está vinculada a préstamos otorgados a o desde empresas offshore establecidas en Panamá por Sigfredo Merino, hermano de Ramiro, según la consultora IBI de Washington DC, que realizó un análisis en 2016 para EE.UU. gobierno. En un caso, ALBA debe 150 millones de dólares a Atlantic Pacific Logistic, mientras que ALBA Petróleos El Salvador (APES), una empresa espejo fundada en Panamá, le debe 165 millones de dólares.

Si bien no existen investigaciones formales contra el ALBA respecto de sus finanzas, la fiscalía general de El Salvador adelanta actualmente una investigación contra José Luis Merino por acusaciones de que ayudó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a traficar armas y drogas. La investigación comenzó en 2008, después de que la fiscalía general de Colombia entregara a El Salvador cartas certificadas escritas por el líder de las FARC, Raúl Reyes, asesinado en marzo de ese año, en las que identifica al “comandante Ramiro” como uno de los intermediarios de las FARC para misiles y otras armas.

Pero la investigación más comprometedoras es de naturaleza política y se está llevando a cabo ahora en el Congreso de Estados Unidos. La Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes comenzó a escudriñar los negocios de los políticos salvadoreños después de que el senador Marco Rubio (republicano por Florida) hiciera acusaciones en 2016 de vínculos con el narcotráfico y el lavado de dinero.

El Comité de la Cámara de Representantes confirmó que el órgano legislativo planeaba enviar una carta al Departamento de Estado sugiriendo que se amplíen las investigaciones sobre José Luis Merino y sus finanzas para determinar si ha cometido delitos financieros que afectan a Estados Unidos. La fuente, que habló bajo condición de anonimato, afirmó que la carta contará con el apoyo de legisladores tanto demócratas como republicanos. “La idea es que el gobierno pueda rastrear el dinero, que busque en las finanzas de Merino porque está claro que puede haber fondos de Venezuela y de las FARC”

Después de los comentarios de Rubio, el fiscal general salvadoreño Douglas Meléndez anunció que había reabierto la investigación de 2008 sobre los archivos de las FARC. Sin embargo, hasta el momento no se ha hecho público ningún avance en el caso.

Albaquetzal e Hydrooil: iniciativas de expansión regional

“Estábamos en el centro de las victorias populares... [y] puso de relieve la rebelión de los pueblos latinoamericanos contra las imposiciones del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y otras medidas que los organismos multilaterales habían impuesto usando su poder y las capacidades de su modelo neoliberal”, dijo José Luis Merino en el canal de televisión TVX de El Salvador. Fue una unión perfecta entre los guiones del ALBA y el chavista en cuanto a la evolución del FMLN desde que llegó al poder en 2009.

Merino y su papel en empresas financiadas con dinero venezolano despertaron muchas sospechas en Washington hacia el final del gobierno del expresidente estadounidense Barak Obama, no sólo por las similitudes entre la retórica de Merino y la ideología chavista, sino también por sus potenciales vínculos con el crimen organizado en la región.

Además de la participación directa o indirecta de Merino en el financiamiento de otras empresas de ALBA Petróleos y su supuesta relación de largo plazo con las FARC, en 2016 surgieron cuestionamientos sobre sus vínculos con el empresario salvadoreño Enrique Rais, cuyos aviones fueron detenidos en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico. Rais se encuentra actualmente prófugo de cargos de corrupción en El Salvador que también involucran al ex fiscal general Luis Martínez.

En agosto de 2017, en casos que no involucraban a ALBA Petróleos ni a Merino, el fiscal general de El Salvador ordenó el arresto de Rais, el exfiscal general Martínez y una docena de abogados y exfuncionarios públicos por delitos que incluían corrupción y presunta fabricación de pruebas. En enero siguiente, después de que un tribunal superior denegara una orden de libertad condicional, Rais y otros sospechosos huyeron del país.

La relación entre Rais y Merino es clave para comprender cómo ALBA Petróleos se comprometió con empresas y actores establecidos, así como con aquellos

sospechosos de corrupción, para promover los objetivos políticos y comerciales de ALBA Petróleos, que posteriormente utilizaron para mover dinero en El Salvador .

En una entrevista reciente, Merino admitió que era amigo de Rais. "Lo conozco. Él es mi amigo. Hemos hablado de muchas cosas. No somos socios de nada, absolutamente de nada", afirmó el dirigente político.

Si bien es cierto que no existen documentos legales en los que aparezcan juntos los nombres de José Luis Merino y Enrique Rais, sí existen muchos que establecen negocios entre el FMLN o ALBA Petróleos y Rais o sus familiares.

Un excelente ejemplo de cómo Merino intentó llevar sus negocios a nuevas alturas a través de su conexión con Rais es la empresa llamada Hydroil, que pertenece a Rais. Se llegó a un acuerdo en el que Hydroil suministraría a ALBA Petróleos parte del petróleo venezolano que comprara.

El 11 de enero de 2011, Hydroil acordó suministrar y vender 8.4 millones de galones de diesel a ALBA Petróleos a \$2.58 por galón con la condición de que ALBA abra una "tarjeta de crédito irrevocable... transferible contra documentos de embarque a favor de Hydroil SA de CV, "un acuerdo por un total de 21,6 millones de dólares " .

Seis meses antes, el 7 de julio de 2010, Rais había escrito a un grupo de subordinados que se encontraban en Kosovo explorando la adquisición de empresas para comprar "productos [para vender] a ALBA Petróleos". Según los correos electrónicos entre Rais y sus empleados, la comunicación entre Merino y Rais sirvió para asegurar negocios durante la administración de 2009 a 2014 del expresidente salvadoreño Mauricio Funes, también del partido FMLN, y para intentar expandir negocios en Honduras y Nicaragua.

Los correos electrónicos de Rais a sus socios revelan el objetivo de su relación con Merino. El 23 de febrero de 2011, Rais les escribe: "Lo siento, he estado involucrado en cuestiones políticas. Ramiro ha estado en Venezuela. Todavía no me ha dado la fecha. Me voy a Washington". Y el 1 de septiembre del mismo año envió el siguiente mensaje: "Estoy con el presidente [Funes] ahora. Y Ramiro. Estamos en la última etapa... Estoy trabajando en el nuevo proyecto para Honduras. Él [Ramiro] viaja conmigo".

Comunicaciones de años anteriores, como este mensaje del 8 de febrero de 2010, revelan una actividad similar: "Como mencioné, visitamos a la mujer en Managua [probablemente refiriéndose a la primera dama Rosario Murillo] con todos sus asesores. Sí, hemos estado en negociaciones con ellos a través de Ramiro. Estamos invitados a participar". Y hubo otro el 13 de marzo de 2010: "Esta mañana a las 10 me voy a reunir con Ramiro y el ministro de Hacienda".

La relación entre Merino y Rais creció hasta abarcar múltiples empresas con vínculos tanto con hombres como con redes con líderes políticos del FMLN o sus familiares, todo ello resultando en importantes contratos.

Así se desprende del contrato firmado por ALBA Petróleos y Vifasa, otra empresa del Rais, para la construcción de una vía de acceso de petroleros al puerto de la ciudad salvadoreña de Acajutla, por un valor de más de 1,3 millones de dólares. Más importante que el monto del acuerdo, sin embargo, son las firmas en sus páginas: la de Rais está acompañada por las de la vicepresidenta de ALBA Petróleos, Luz Estrella Rodríguez, y Orestes Ortiz Quinamar, el notario que certificó legalmente el contrato. Estos nombres muestran cuán estrechas son las relaciones entre ALBA Petróleos, Merino, el FMLN, las empresas de Rais y sus gobiernos. (Luz Estrella Rodríguez fue alcaldesa de Apopa, El Salvador, en representación del partido FMLN. Ortiz Quintanar es hijo de Orestes Ortiz,

Estas conexiones han ayudado a Merino no sólo a lograr avances comerciales, sino también a extender la esfera de influencia de ALBA Petróleos a otros países. Por ejemplo, en Guatemala fundó Albaquetzal, una empresa espejo de ALBA Petróleos, con la ayuda del grupo empresarial Rais.

Albaquetzal fue registrada el 7 de diciembre de 2009 en Guatemala con sede social ubicada en Calle 2, #15-18 en la Zona 13 de la Ciudad de Guatemala. El propietario de Albaquetzal figura como Lifi Consulting Group, una empresa con sede en Panamá cuyo control legal fue entregado a Rais en 2013.

Albaquetzal está autorizada para realizar transacciones comerciales e importaciones y exportaciones, especialmente en los sectores agrícola, de combustibles fósiles y de aviación, incluso con ALBA Petróleos. Además, al igual que ALBA Petróleos, Albaquetzal ha utilizado abogados radicados en Panamá que han estado involucrados en el escándalo de los “Papeles de Panamá” por su papel en la creación de empresas extraterritoriales.

Cuando Albaquetzal se estableció en Guatemala, sus socios eran José Ismael Soto Orantes y Rony Armando Martínez Iboy, guatemaltecos también mencionados en los Papeles de Panamá, a quienes Rais conoció a través de Ramiro, según dijo a InSight un investigador salvadoreño que ha investigado las actividades de Rais. Delito.

En el caso de ALBA Petróleos, según una investigación publicada por el medio digital El Faro, fue a través del estudio de abogados Infante & Pérez Almillano que el conglomerado creó sus diversas sociedades offshore en Panamá, entre ellas Alba Petróleos de El Salvador (APES) y Atlantic Pacific Logistic, SA del hermano de CV Merino, Sigfredo, ha estado involucrada en APES.¹⁰ Entre ambos y el conglomerado salvadoreño, ha habido préstamos por un total aproximado de \$460 millones.

Protección política

A pesar de la plétora de acusaciones que los rodean, ni el FMLN ni el gobierno salvadoreño han flaqueado en su protección a Merino y su apoyo público a ALBA Petróleos. Cuando, a finales de octubre de 2016, el comandante Ramiro se

acercaba al final de su mandato como representante en el Parlamento Centroamericano, el presidente Sánchez Cerén solicitó a su ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, que creara un cargo ad hoc para Merino. Así nació el Viceministerio de Relaciones Exteriores.

Fue un nombramiento bien calculado que protegió al hombre fuerte detrás de ALBA Petróleos contra un proceso penal. Merino asumió el cargo poco después de que el fiscal general de El Salvador tomara medidas contra Rais en respuesta a las acusaciones del senador Rubio, y después de que el fiscal general Meléndez anunciara que se reabría la investigación sobre armas de las FARC.

El FMLN también apoyó a Merino ante las acusaciones del senador Rubio. En un comunicado, el partido expresó “su enfática condena y rechazo a las acusaciones difamatorias e infundadas contra uno de nuestros mejores líderes, un miembro de la comisión política de nuestro partido reconocido como un luchador de larga data por nuestro pueblo”.

Es más, antes de emitir su comunicado, el FMLN incluso envió a uno de sus representantes más influyentes, Roger Blanding Nerio, a Washington, DC para visitar varias oficinas del Congreso para conseguir apoyo para Merino y expresar el desacuerdo del partido con lo que llamó interferencia del embajador de Estados Unidos. a El Salvador Jean Manes.

Públicamente, Manes no se ha referido a Merino, pero ha dejado claro que apoya las investigaciones del fiscal general Meléndez contra funcionarios del FMLN. Mientras tanto, según confirmó una fuente diplomática en San Salvador y las dos fuentes en el Congreso estadounidense, el embajador apoyó en privado la investigación contra Merino.

El 21 de junio de 2017, un grupo bipartidista de 14 miembros del Congreso estadounidense firmó una carta solicitando que el Departamento del Tesoro estadounidense abriera una investigación contra Merino porque sus “asociaciones de larga data con redes criminales organizadas transnacionales son objeto de investigaciones criminales estadounidenses”.

Los legisladores que firmaron la carta creen que las actividades criminales vinculadas a Merino podrían representar una “amenaza significativa” para la seguridad estadounidense.

Es muy probable que las investigaciones contra Merino se amplíen, y las sanciones son otra posibilidad. Pero mientras Estados Unidos promete seguir investigando sus actividades pasadas en El Salvador, Ramiro sigue bien protegido por la autoridad y la influencia que ha mantenido hasta ahora.

En Grosso modo es un pequeño panorama de la situación en el hemisferio en donde hay que mirar la expansión de estas economías criminales el fortalecimiento de estas y la indudable relación política que tienen es una alerta a donde vamos y como

vamos, pero ante todo a tomar decisiones claras y unificadas con el fin de que de alguna forma se pueda cerrar y dar una luz para que el camino mejore.

CT (RP) Bernardo Molina Ojalora
Administrador Policial